

**INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL**, recaído en el
proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que sustituye el procedimiento
laboral contemplado en el Libro V del Código
del Trabajo.

BOLETÍN Nº 3.367-13

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
tiene el honor de informaros respecto del proyecto de ley de la referencia,
iniciado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con urgencia
calificada de "simple".

Cabe destacar que este proyecto fue discutido
sólo en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de
la Corporación.

A una o más de las sesiones en que la Comisión
estudió esta iniciativa de ley, asistieron, además de sus miembros, el Ministro
del Trabajo y Previsión Social, señor Yerko Ljubetic, acompañado del asesor,
señor Francisco Del Río; el Ministro de Justicia, señor Luis Bates, junto al
Jefe de la División Jurídica de esa Cartera, señor Francisco Maldonado, y el
asesor, señor Rodrigo Romo; la Subsecretaria de Previsión Social, señora
Marisol Aravena, acompañada de su Jefe de Gabinete, señor Edgard Faure,
y del abogado, señor Pedro Contador; y el Jefe de Fiscalización de la
Dirección del Trabajo, señor Cristián Mellis.

- - -

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Modernizar la justicia laboral y previsional,
dotándola de un procedimiento sustentado en los principios de contradicción,
celeridad, oralidad, intermediación, concentración, impulso procesal de oficio,
publicidad, buena fe y gratuidad. Lo anterior, para contar con una justicia
eficaz y oportuna.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Os hacemos presente que deben aprobarse como
normas de rango orgánico constitucional los números 15, y 16, respecto a los

artículos 426, inciso segundo, y 494, inciso primero, todos del artículo 1º permanente del proyecto, por cuanto inciden en atribuciones de los tribunales de justicia, en atención a lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política. Lo anterior, en relación con el artículo 63, inciso segundo, del Texto Fundamental.

Cabe dejar constancia de que, en su oportunidad, la Honorable Cámara de Diputados ofició a la Excelentísima Corte Suprema, con el objetivo de recabar su parecer respecto a la iniciativa de ley, la que emitió su opinión por Oficio N° 2.346, de 4 de noviembre de 2003.

- - -

Durante la discusión del proyecto, concurrieron especialmente invitadas a exponer sus puntos de vista sobre el mismo, las entidades que se indican a continuación, representadas del siguiente modo:

- La Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, por intermedio del abogado, señor Alvaro Flores.

- La Asociación de Abogados Laboralistas de Chile, mediante su Presidente, señor Diego Corvera; su Vicepresidente, señor Rafael Carvallo, y su Director, señor Juan Sebastián Gumucio.

- La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, por intermedio de su Presidente, señor Mauricio Cordaro, y el Director, señor Sergio Videla.

- El Instituto Libertad y Desarrollo, mediante el abogado investigador del Programa Legislativo, señor Rodrigo Delaveau, y el economista, señor Rafael Sánchez.

- La Sociedad de Fomento Fabril, por medio de su Gerente de Operaciones, señor Jaime Dinamarca.

- La Confederación de la Producción y del Comercio, por intermedio del Gerente General, señor Carlos Urenda; el Presidente de la Comisión Laboral, señor Augusto Bruna, y el abogado, señor Pablo Gutiérrez.

- La Cámara Chilena de la Construcción, mediante el Fiscal, señor Augusto Bruna, y el abogado, señor Pablo Gutiérrez.

- La Central Unitaria de Trabajadores, por medio del Presidente, señor Arturo Martínez; el Vicepresidente, señor Hernán Bravo; el Encargado del Departamento de Comunicaciones, señor Guillermo Sherping; el Encargado del Departamento de Economía y Empleo, señor

Ethiel Moraga, y la Encargada del Departamento de Salud y Prevención, señora Ana María Muñoz.

- La Central Autónoma de Trabajadores, mediante su Consejero, señor Hernán Méndez, y la Encargada del Área de Desarrollo Sindical-Capacitación, señora Magdalena Castillo.

- La Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Microindustria, Servicios y Artesanado de Chile (CONUPIA), y la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (CONAPYME), por intermedio de su Presidente, señor Iván Vuskovic, y los Dirigentes, señores Juan Araya, Mauricio Cordaro, Héctor Sandoval y Felipe Zamorano.

Los invitados acompañaron sus exposiciones con diversos documentos que quedaron a disposición de la Comisión y que fueron debidamente considerados por sus integrantes. Cabe señalar que la Confederación de la Producción y del Comercio y la Cámara Chilena de la Construcción expresaron su opinión en un mismo documento.

Se deja constancia de que todos los documentos acompañados por quienes concurrieron invitados a la Comisión se contienen en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

- - -

ANTECEDENTES

Para el debido estudio de esta iniciativa legal, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes:

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

- 1) La Constitución Política.
- 2) El Código del Trabajo.
- 3) El Código de Procedimiento Civil.
- 4) El Código Orgánico de Tribunales.
- 5) El Código Penal.

6) La ley N° 17.322, que establece normas para la cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas de las instituciones de previsión.

7) La ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

8) El decreto ley N° 3.500, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones.

9) El decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1967, que fijó las funciones de la Dirección del Trabajo.

II.- ANTECEDENTES DE HECHO

El Mensaje con el que se inicia este proyecto de ley señala que es necesario que todos los trabajadores tengan acceso a una justicia laboral eficiente y expedita, para lo cual se requiere contar con mecanismos de tutela jurisdiccional idóneos y eficaces.

Agrega que la percepción de la comunidad jurídica es que el acceso a la justicia laboral y previsional y su funcionamiento, plantean serios problemas de equidad y de efectiva vigencia del derecho, en razón de las insuficiencias que presenta, afectando, principalmente, a quienes recurren ante el órgano jurisdiccional, normalmente trabajadores que han perdido su empleo y que carecen de los medios necesarios para el sustento familiar.

El sistema vigente, caracterizado por la excesiva tardanza en la tramitación de los procesos laborales, producto tanto de la insuficiente cobertura de los tribunales como de la propia conformación del procedimiento, plantea serias dificultades en relación con el debido acceso a la justicia por parte de los trabajadores, provocando con ello sentimientos de frustración y desencanto y la sensación de que aquellos derechos que les son reconocidos, en la práctica se transforman en letra muerta.

Es por ello, añade el Mensaje, que se hace patente e impostergable la necesidad de introducir profundas transformaciones en el sistema de la justicia laboral y previsional, con miras a implementar en Chile un modelo de relaciones laborales que dé cuenta de mayor equidad y equilibrio, asegurando niveles adecuados de bienestar social y económico, para lo cual se requieren procedimientos jurisdiccionales caracterizados por la celeridad, la inmediatez y la concentración. Ello conlleva importantes grados de pacificación de las relaciones laborales.

En este sentido, y con el objetivo de iniciar un proceso de discusión y diálogo tendiente a diseñar una propuesta técnica del más alto nivel, se convocó a mediados del año 2000, en conjunto con el Presidente de la Corte Suprema y con la cooperación de la Organización Internacional del Trabajo, a personalidades de distintos ámbitos del quehacer judicial, académico, del servicio público y de los operadores del derecho del trabajo. Ello dio cuerpo al Foro para la Reforma de la Justicia Laboral y Previsional, cuya tarea esencial se orientó a la elaboración de una propuesta que debía dar cuenta de los parámetros deseables y posibles entre los que habría de desarrollarse esta tarea de tanta trascendencia. En mayo del año 2002 el Foro hizo entrega al país del documento "Bases Fundamentales para la Reforma de la Justicia Laboral y Previsional", en el cual se cimentaron los pilares de la futura reforma de la justicia laboral.

El Mensaje destaca que la presente iniciativa de ley apunta a los siguientes objetivos:

1. Brindar un mejor acceso a la justicia.

Se busca hacer posible un mejor acceso a la justicia del trabajo, no sólo en cuanto a la cobertura de los tribunales, sino que, también, en lo relativo a la forma en que se desarrollan los actos procesales que conforman el procedimiento laboral, materializando así el derecho a la tutela judicial efectiva, que supone no sólo el acceso a la jurisdicción, sino, también, que la justicia proporcionada sea eficaz y oportuna.

2. Posibilitar la efectividad del derecho sustantivo.

El reconocimiento sustantivo de una serie de derechos no es suficiente para alcanzar un sistema de relaciones laborales equitativo y justo. Se requiere, además, contar con los mecanismos adecuados de tutela y protección jurisdiccional.

En esta dirección, el proyecto busca materializar, en el ámbito del proceso laboral, un sistema de garantías procesales que se orienten a dar efectividad al derecho sustantivo.

3. Asegurar el efectivo y oportuno cobro de los créditos laborales.

La efectividad de los derechos laborales no sólo supone el reconocimiento y protección jurisdiccional de los mismos, sino que, también, a modo de complemento ineludible, asegurar el efectivo y oportuno cobro de los créditos laborales.

En este sentido, el proyecto busca optimizar y agilizar los procedimientos de cobro de las obligaciones laborales, poniendo énfasis en el impulso procesal de oficio del juez, en orden a llevar adelante el procedimiento ejecutivo. A ello debe sumarse el fortalecimiento de la especialización en la cobranza con la creación de los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.

Por otra parte, y en pos de los mismos objetivos, se busca independizar el cobro de las cantidades adeudadas -sean éstas reconocidas por el deudor o declaradas por el juez en forma parcial- de la solución definitiva de las materias controvertidas en el juicio, evitando que el discernimiento y fallo de estas últimas, posterguen la solución de obligaciones que no tienen tal carácter.

4. Agilización de los juicios del trabajo.

Es ésta, quizás, una de las más sentidas demandas ciudadanas y una prioridad de la agenda gubernamental.

La actual situación, caracterizada por la excesiva dilación de los juicios del trabajo, supone en algunos casos una verdadera denegación de justicia, particularmente para los trabajadores que deben postergar en el tiempo la satisfacción de sus demandas, en la mayoría de los casos con un carácter alimentario, viéndose compelidos, frente a las escasas posibilidades de lograr resultados oportunos, a aceptar en no pocas ocasiones acuerdos muy por debajo de lo que la ley les asegura.

5. Modernización del sistema procesal laboral.

En la última década, nuestro país ha sufrido enormes transformaciones en sus instituciones políticas, productivas y sociales, acometiendo, en consecuencia, progresiva y decididamente las necesarias e ineludibles modernizaciones del sistema de administración de justicia. Este proceso modernizador debe encontrar en el ámbito del proceso laboral un terreno fértil para su concreción, recogiendo de las experiencias y tendencias comparadas exitosas en esta materia, las ideas matrices que permitan lograr los objetivos planteados.

6. Configuración del proceso laboral como un instrumento de pacificación social.

El proceso laboral está llamado a constituirse en uno de los mecanismos privilegiados de solución eficiente y oportuna de conflictos en el ámbito laboral, dando con ello las certezas que los actores sociales requieren para el normal desenvolvimiento de sus relaciones y la actividad productiva.

7. Potenciar el carácter diferenciado del procedimiento laboral.

El proceso laboral busca materializar en el ámbito jurisdiccional las particularidades propias del derecho del trabajo, en especial su carácter protector y compensador de las posiciones disímiles de los contratantes. De ahí, la necesidad de contar con un sistema procesal diferenciado claramente del sistema procesal civil, cuyos objetivos son no sólo diversos, sino, en muchas ocasiones, antagónicos.

8. Diseñar un modelo concreto de tutela de los derechos fundamentales en el seno de las relaciones laborales.

Uno de los pilares centrales del proyecto apunta a potenciar la vigencia plena, en el ámbito jurídico-laboral, de los derechos que el trabajador detenta no sólo en cuanto trabajador, sino que, también, en su condición de persona (derecho a la intimidad y vida privada, el honor y la propia imagen, el pensamiento político o religioso, la libertad de expresión, el derecho a no ser discriminado, etcétera). Se trata, en definitiva, del posicionamiento de los derechos fundamentales como ejes vertebradores de unas relaciones laborales plenamente democráticas.

Dicha vigencia requiere, como condición necesaria, no sólo de un reconocimiento material, sino que, también y ante todo, de mecanismos de tutela jurisdiccional eficaces e idóneos.

Teniendo en cuenta las consideraciones esbozadas, se ha estimado de vital importancia, siguiendo muy de cerca las experiencias comparadas, diseñar un modelo concreto de tutela de los derechos fundamentales al interior de la empresa, mediante un procedimiento especial que dé cuenta de una serie de garantías procesales conducentes a una adecuada y eficaz protección.

El Mensaje del Ejecutivo se refiere, luego, a los contenidos del proyecto, subrayando los principios formativos sobre los que se sustentará el procedimiento laboral, a saber, oralidad, publicidad, concentración, inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe y gratuidad.

Finalmente, S.E. el Presidente de la República destaca que, en lo relativo a las reglas comunes, el proyecto contempla innovaciones importantes, tales como la posibilidad de litigar en forma electrónica, la simplificación del sistema de notificaciones, y la ampliación de la facultad cautelar del juez.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

En primer término, el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social realizó una presentación general del proyecto, la que acompañó con la proyección de un conjunto de transparencias, que se contienen en un Anexo único, que se adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

En su exposición, el Secretario de Estado reiteró los fundamentos de la iniciativa, consignados en el Mensaje del Ejecutivo, subrayando los siguientes aspectos, en relación con el nuevo procedimiento en los juicios del trabajo:

- 1.- Diagnóstico del actual sistema.
- 2.- Principios formativos del procedimiento
propuesto.
- 3.- Principales contenidos.
- 4.- Principales cambios en primer trámite
constitucional.

1.- Diagnóstico del actual sistema:

Respecto de este punto, señaló que, sobre la base de 148.992 causas ingresadas en el período 1994-1998, se puede afirmar que la distribución porcentual de las actuales causales de término de un juicio ordinario laboral corresponde a 60% de archivos, 15% de avenimientos y 1% de otras, mientras que sólo un 24% de dichas causales está constituido por sentencias judiciales que pongan fin al conflicto sometido al conocimiento del tribunal.

Lo anterior obedece a los dilatados tiempos de respuestas en la tramitación de un juicio ordinario laboral, así como al hecho del número, hasta hace poco escaso, de tribunales del trabajo, la mayor parte de los cuales están radicados en la Región Metropolitana.

Aseveró que el problema que presenta el sistema actual no es sólo poca cobertura, sino también del diseño que en la práctica tiene el procedimiento laboral que, si bien originalmente estaba bien inspirado, fue desnaturalizándose hasta tener las trabas y demoras que hoy lo caracterizan.

Destacó que el Ejecutivo considera que lo fundamental no es meramente aumentar la cobertura, sino, además, que el diseño del procedimiento se oriente en función de la expedición y celeridad de los juicios.

El señor Ministro expresó que de los elementos de diagnóstico mencionados surgió, el año 2000, la necesidad de crear el Foro para la Reforma a la Justicia Laboral y Previsional, con el objetivo de elaborar una propuesta integral de modernización, integrado por autoridades del Ejecutivo, académicos, miembros del Poder Judicial y, en general, diversos especialistas y operadores del sistema.

A partir del trabajo del Foro y de su propuesta, el Ejecutivo inició la tramitación de tres proyectos de ley, que conforman esta reforma laboral. El primero de ellos se transformó en la ley N° 20.022, que aumentó a 40 los tribunales del trabajo y creó 9 tribunales especializados de cobranza laboral y previsional. El segundo, se convirtió en la ley N° 20.023, que establece un nuevo procedimiento de cobranzas ejecutivas laborales y previsionales. El último de ellos es precisamente la iniciativa en informe.

2.- Principios formativos del nuevo procedimiento:

Expuso que los cinco principios que se describen a continuación informan el conjunto de las disposiciones del proyecto.

- Oralidad. Supone una comprensión más efectiva para los usuarios del sistema, pues las actuaciones son más entendibles por las partes, y genera la sensación de mayor cercanía a la justicia. Se traduce, además, en menor burocratización.

Puso de relieve el carácter oral del procedimiento propuesto. Hizo notar que éste es de gran sencillez, constituyendo la audiencia de contestación, conciliación y prueba, el eje central en torno al cual gira el conjunto del procedimiento.

- Inmediación. Hay un contacto directo del juez con las partes y los medios de prueba, quien dirige la audiencia y determina la pertinencia de las actuaciones de las partes. Se lo faculta para adoptar, de oficio, medidas que tenderán a evitar dilaciones injustificadas.

El Secretario de Estado manifestó que se ha detectado un problema en relación con la calidad de las sentencias y resoluciones de los tribunales, provocado en muchos casos por la distancia que el juez tiene con el procedimiento que se sigue, lo que se evita si el magistrado está compenetrado con el desarrollo del procedimiento y los planteamientos de las partes.

- Concentración. La audiencia es el momento esencial de la tramitación y en ella deben quedar resueltas todas las cuestiones importantes. En la audiencia deben realizarse el máximo de diligencias: contestación, prueba e incidentes. Así, se evitará uno de los inconvenientes del procedimiento actual, cual es que entre hitos específicos del procedimiento se abra un conjunto de posibilidades de recursos y presentaciones que lo dilaten excesivamente.

- Celeridad. Se conceden atribuciones al juez para tomar diversas medidas orientadas a la brevedad del juicio, evitando toda dilación, especialmente mediante la interposición de incidentes.

- Gratuidad. La justicia es gratuita para los trabajadores que carezcan de recursos para litigar.

3.- Principales contenidos del proyecto propuesto:

- Establece un procedimiento oral para la contestación de la demanda, la presentación de incidentes y la rendición de la prueba.

- Propone un procedimiento especial para tratar causas en las que se ventilen infracciones a los derechos fundamentales de los trabajadores. Con ello, el proyecto se hace cargo de una demanda histórica, que lo pone a la altura de los estándares internacionales en la materia. La cuestión dice relación con un conjunto de derechos reconocidos en la Constitución Política, que pueden ser vulnerados en función del ejercicio de las facultades de administración por parte del empleador. Ésta es una de las innovaciones más relevantes de la iniciativa en informe.

- Restringe el uso abusivo de la segunda instancia. No se ajusta a este tipo de procedimiento que, siendo la primera instancia breve, la segunda instancia sea muy dilatada, por lo que esta última queda reservada a la revisión de las cuestiones de derecho.

- Otorga amplias facultades al juez para dirigir la actuación de las partes y determinar su pertinencia, para que no se pierda el foco del asunto que se ventila ante el tribunal.

- Concentra todas las actuaciones en una sola audiencia, incluidas las sentencias de incidentes.

4.- Principales cambios en primer trámite constitucional:

El señor Ministro efectuó una breve reseña de lo acaecido en dicho trámite, destacando el gran apoyo que obtuvo el proyecto.

Hizo presente que la discusión implicó arribar a acuerdos políticos para modificar el proyecto original en los siguientes aspectos relevantes:

- Perfeccionamiento del principio de concentración.

- Establecimiento de un procedimiento monitorio para las causas de pequeña cuantía y fácil resolución, que es una combinación de ámbito administrativo y jurisdiccional, que podría significar descongestión de los nuevos tribunales, en lo relativo a cuestiones vinculadas a despidos de trabajadores, en relación con montos inferiores a 4 ingresos mínimos mensuales. Señaló que, según los antecedentes de que se dispone, esos casos constituyen la mayor parte de los que se conocen en la actualidad por los tribunales.

- Ajustar, en la forma descrita con anterioridad, la segunda instancia, de modo que fuera apropiada al carácter oral del procedimiento.

- Otorgar competencia para desarrollar la audiencia al Secretario del Tribunal en los juzgados de competencia común, en casos calificados. Ello constituye una excepción al principio de inmediación.

- Suprimir la competencia para conocer de las indemnizaciones por daño moral que pudiere corresponder.

El señor Ministro manifestó que el proyecto original del Ejecutivo hacía explícito en la normativa que los asuntos relativos al daño moral, en el marco de las relaciones de trabajo, pudieran ventilarse en juzgados laborales. Señaló que, finalmente, el Gobierno priorizó otros objetivos dentro del procedimiento, en consideración, además, a que estima que se está desarrollando una evolución de la jurisprudencia favorable en la materia, que pudiera concluir en soluciones preferibles a las que se hubiera podido alcanzar en un proyecto de ley.

- Proponer un procedimiento especial para tratar causas en las que se ventilen infracciones a los derechos fundamentales de los trabajadores. Al respecto, explicó que, en lo esencial, se precisaron con mayor claridad cuáles eran, desde el punto de vista constitucional, los derechos cuya vulneración puede dar lugar al procedimiento especial.

El Honorable Senador señor Ríos consultó por la posibilidad de incorporar a los Jueces de Policía Local en la resolución de los problemas laborales, atendido el hecho de que, con ocasión de la reforma

procesal penal, esos jueces se han visto liberados de conocer causas que antes les correspondían, y de que todas las comunas cuentan con juzgados de policía local, lo que, en su concepto, hace conveniente incorporarlos al sistema.

Asimismo, Su Señoría consideró que deben dictarse normas que apunten a eliminar en el futuro la existencia de los conflictos que motivan los juicios que se siguen ante los tribunales laborales.

El Honorable Senador señor Parra solicitó mayores antecedentes respecto de los elementos de diagnóstico que se tuvieron en cuenta por el Ejecutivo, cuestión que reviste importancia para el adecuado análisis de la iniciativa en informe.

En relación a los aspectos en que la Cámara de Diputados modificó el proyecto del Ejecutivo, estimó conveniente la enmienda relativa a la competencia que se otorga a los secretarios de los tribunales de jurisdicción común, pero opinó que lo aconsejable en tal caso es asumir íntegramente una u otra opción y no romper el principio de inmediación con intervenciones de jueces distintos en momentos diferentes, sino que sea sólo un juez el que conozca del juicio. No debiera descartarse la posibilidad de establecer la competencia del secretario, transformado en juez, para que conozca íntegramente la causa.

Su Señoría lamentó que se haya suprimido la competencia para conocer las indemnizaciones por daño moral, destacando la importancia del tema, que es de aquellas modificaciones legislativas que, en su opinión, pueden generar cambios culturales. Reiteró que el daño moral, ocasionado por relaciones laborales, es un tema que no puede seguir siendo extraño a la jurisdicción del trabajo.

El Honorable Senador señor Ruiz De Giorgio señaló que el proyecto de ley en informe le parece absolutamente necesario, ya que la situación en que se encuentran los trabajadores es deplorable. Hizo hincapié en que el nivel de incumplimiento de las normas laborales es enorme, y lo que importa es que se dé cumplimiento a la legislación laboral vigente, más que seguir introduciendo modificaciones a las normas en la materia.

Expresó que los resultados que exhibe el sistema son muy bajos, como demuestran los porcentajes de causas archivadas, lo que implica que la justicia no funciona.

Su Señoría manifestó dudas acerca del nivel de asesoría profesional con que contarán los trabajadores en el modelo propuesto, y la eficiencia que alcance la defensa del trabajador.

Consideró, asimismo, imprescindible que este proyecto se despache en un plazo breve, sin que su tramitación se extienda en exceso, como sucedió en la Cámara de Diputados.

El Honorable Senador señor Bombal hizo presente su preocupación por la duplicidad que se podría producir entre el catálogo de derechos fundamentales resguardados por la Constitución Política con el recurso de protección y aquellos de los que corresponda conocer a los juzgados laborales, materia sobre la cual consideró necesario profundizar, durante la discusión en particular.

En el curso de la discusión, el Honorable Senador señor Parra manifestó su inquietud, en orden a si, con los medios de que disponen, las Corporaciones de Asistencia Judicial y los Abogados de Turno podrán brindar, adecuadamente, la asistencia jurídica del caso a los litigantes que gocen del privilegio de pobreza. Su Señoría señaló que, sobre el particular, sería oportuno conocer la opinión del Ministerio de Justicia.

En una sesión posterior, el señor Ministro de Justicia se refirió a la materia precedentemente enunciada, destacando la larga historia de las Corporaciones de Asistencia Judicial en nuestro sistema. Subrayó que, por su experiencia profesional, ha podido conocer profundamente el funcionamiento de las mismas y puede aseverar que operan razonablemente bien, teniendo, además, una vasta trayectoria en materias laborales. Ahora bien, en cuanto a los Abogados de Turno, su percepción es que, como institución, probablemente desaparecerán en el futuro, ya que, a lo largo de los años, no han dado los resultados que serían deseables.

El Secretario de Estado expresó que el tema de las Corporaciones de Asistencia Judicial se inserta en un ámbito más amplio, esto es, el del acceso a la justicia y, en esa línea, el proyecto contempla su participación, a fin de evitar desigualdades jurídicas entre las partes.

Agregó que dichas Corporaciones tienen una característica muy particular de atención de las personas que carecen de recursos para pagar los servicios de un abogado, ya que cuentan con los siguientes componentes: 1) los postulantes que realizan su práctica para obtener el título de abogado, 2) los abogados supervisores, en quienes descansa, en buena medida, el funcionamiento de estas instituciones, y 3) un cuerpo de asistentes sociales, de notables destrezas, que resuelven gran parte de los problemas que conocen estas Corporaciones, por la vía de la conciliación, lo que evita que todos estos conflictos lleguen a los postulantes y, con mayor razón, a los tribunales. Respecto de este último aspecto, resaltó que el proyecto precisamente contempla la conciliación como una fórmula de resolución de conflictos.

El señor Ministro de Justicia manifestó que lo anterior se inserta en una política que ha impulsado con fuerza, denominada la “justicia de los acuerdos”, cuyo objetivo es que los problemas se resuelvan por la vía de la conciliación, evitando, por sus múltiples implicancias, que todo conflicto llegue a los tribunales, siguiendo la línea adoptada, por ejemplo, en la reforma procesal penal, en la nueva ley de matrimonio civil, en la legislación sobre tribunales de familia, en la llamada Ley AUGE, etcétera.

Lo anterior, se vincula con la capacidad de las Corporaciones de Asistencia Judicial para llevar adelante, en forma adecuada, las defensas de quienes gocen del denominado “privilegio de pobreza”, en la línea de brindar, más bien, asistencia jurídica y no sólo judicial, en lo posible, con fines preventivos más que de simple solución de conflictos.

El Secretario de Estado remarcó las siguientes disposiciones propuestas por la iniciativa en examen:

El artículo 430, que, en lo que interesa, señala que las partes que gocen de privilegio de pobreza tendrán derecho a defensa letrada gratuita por parte de las respectivas Corporaciones de Asistencia Judicial o, en su defecto, por un abogado de turno. Es decir, no estamos ante una gratuidad genérica, sino que esto se relaciona con dicho privilegio que, para ser otorgado, requiere de un serio análisis previo que se traducirá, en tanto proceda, en un certificado que acreditará que la persona reúne los requisitos que ameritan tal beneficio.

A su turno, el artículo 434 prescribe que las partes deberán comparecer con patrocinio de abogado y representadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio, concepto, este último, que comprende a los postulantes que realizan su práctica en las Corporaciones de Asistencia Judicial.

Ahora bien, el proyecto, en la misma línea de otras reformas a nuestra judicatura, incorpora la oralidad y, no cabe duda, de que no sólo tales postulantes, sino los abogados en general, deberán adquirir nuevas destrezas para actuar en este tipo de procedimientos.

Al respecto, el señor Ministro reconoció que podría haber alguna aprehensión de que el contingente de postulantes tuviera ciertas limitaciones para desempeñarse en el juicio oral, en tanto no adquirieran las destrezas requeridas. Sin embargo, no hay que olvidar que, desde hace mucho tiempo, el artículo 527 del Código Orgánico de Tribunales los faculta expresamente para alegar en Cortes de Apelaciones y Marciales, cuestión que realizan frecuentemente y, por lo general, muy bien. Es decir, los postulantes ya tienen esta experiencia, que les servirá para desarrollar destrezas para el juicio oral.

Agregó que otro elemento capital a considerar en este análisis es que, con motivo de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en todo Chile, las Corporaciones de Asistencia Judicial verán disminuida su carga de trabajo, ya que con la estructura de aquella, especialmente con el rol de los fiscales, las víctimas estarán debidamente protegidas. En consecuencia, el Secretario de Estado estimó adecuado dar un cierto período de evaluación, para determinar el impacto que tendrá la aludida disminución de trabajo en el funcionamiento de dichas Corporaciones y, según los expertos en gestión pública, tal período no puede ser inferior a seis meses.

Hecha esa evaluación, estaríamos en condiciones de señalar, sobre bases sólidas, el verdadero impacto, de manera de saber si es necesario dotar de mayores recursos a estas Corporaciones para que aborden satisfactoriamente la asistencia judicial en materia laboral. Ahora bien, como la iniciativa legal en análisis prevé su entrada en vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial, de acuerdo a los resultados de dicha evaluación, y de ser necesario, podrían suplementarse oportunamente los recursos para las Corporaciones de Asistencia Judicial.

El Honorable Senador señor Ríos señaló que, basado en su experiencia, está convencido de que la normativa contemplada en los aludidos artículos 430 y 434 del proyecto, en la práctica, resultaría aplicable a alrededor del 3% de los conflictos laborales, puesto que la gran mayoría de los problemas se derivan de situaciones cotidianas que no llegan a los tribunales.

Es decir, en concepto de Su Señoría, el procedimiento que se viene proponiendo en la iniciativa alcanzará a un porcentaje muy pequeño de los trabajadores y, por ello, reiteró lo que ha planteado con anterioridad, en orden a la gran conveniencia de incorporar a los Jueces de Policía Local al sistema de resolución de problemas laborales, especialmente aquellos de ocurrencia diaria.

El Honorable Senador señor Ruiz De Giorgio expresó que el tema expuesto por el señor Ministro de Justicia es muy relevante para el éxito de este nuevo procedimiento, ya que las Corporaciones de Asistencia Judicial son uno de los elementos claves en este sistema. Ahora bien, Su Señoría señaló que tiene algunas inquietudes respecto de ciertos aspectos que podrían analizarse y, eventualmente, implementarse antes de que esta iniciativa se convierta en ley. Uno de ellos es la posibilidad de que tales Corporaciones cuenten con un cuerpo de abogados especialistas en materia laboral, que aseguren la eficacia de la defensa.

En relación con lo anterior, precisó que, en tanto exista la segunda instancia en estos asuntos, lo adecuado sería contar con salas especializadas en lo laboral, si bien Su Señoría, en cuanto al procedimiento contemplado en el proyecto, se mostró partidario de no establecer el recurso de apelación en términos amplios.

Asimismo, hizo presente su inquietud por cierta centralización que se observa respecto del funcionamiento de las Corporaciones de Asistencia Judicial, lo que se advierte, por ejemplo, en que, en determinados aspectos, algunas Corporaciones Regionales -como es el caso de la Duodécima Región- dependen de la Corporación Metropolitana de Santiago. Ello entraba la agilidad requerida para el buen servicio de los defendidos.

De igual forma, preocupa a Su Señoría que el procedimiento para determinar si corresponde o no otorgar el privilegio de pobreza sea lo suficiente expedito, puesto que, de no serlo, los trabajadores pueden quedar en la indefensión ante el vencimiento de plazos procesales perentorios.

El Honorable Senador señor Parra señaló que su inquietud central radicaba en que el procedimiento que se quiere poner en marcha requiere de una asesoría jurídica de características nuevas, y es fundamental tener la seguridad de que se podrá contar con esa asesoría para poder aprobar dicho procedimiento.

Por otra parte, debe recordarse que este derecho a la asistencia jurídica es, actualmente, una garantía constitucional y, además, se contempla en el Pacto de San José de Costa Rica, de modo que podría sostenerse que, en esta materia, existe una tarea pendiente para el Estado, en tanto, por los recursos que demanda, no ha sido posible asumir en plenitud hasta ahora, más aun considerando que ni la Constitución Política ni el aludido Pacto hacen distinciones, para asegurar dicha asistencia, en función de la condición socio-económica de la persona, es decir, no la subordinan al privilegio de pobreza.

Su Señoría subrayó que algo debe hacerse al respecto, pero, con los medios de que se dispone, y atendida la forma en que está organizado el sistema, la respuesta ante las exigencias del nuevo procedimiento será sólo parcial. Desde luego, hay que proveer asistencia jurídica a los trabajadores, pero al señor Senador le preocupa la situación de los micro y de los pequeños empresarios, puesto que la condición de empresario no necesariamente es sinónimo de capacidad financiera, y la igualdad de las partes en el proceso es algo que debe cautelarse.

Asimismo, el señor Senador recordó que en la reforma procesal penal se creó la Defensoría Penal Pública, cuyo

presupuesto y nivel de remuneraciones es muy superior al de las Corporaciones de Asistencia Judicial, antecedente que debe tenerse en cuenta si se quiere que estas últimas presten una adecuada asesoría jurídico-laboral a quienes, gozando del privilegio de pobreza, recurran a ellas.

Por último, Su Señoría expresó que, para los efectos de aprobar en general el proyecto, se declaraba satisfecho de la información recibida de parte del señor Ministro de Justicia, puesto que de sus palabras quedó claro que el problema está registrado y existe la determinación de abordarlo, de manera que a la puesta en marcha de esta reforma lo pertinente esté solucionado.

El señor Ministro de Justicia recordó que la Dirección del Trabajo cumple una labor importante como instancia de conciliación, en forma previa al conocimiento judicial de los conflictos, resolviendo muchos problemas. También debe tenerse en cuenta que los jueces, por medio de la Academia Judicial, tendrán una preparación que apunte en igual sentido, esto es, promover las soluciones vía acuerdos entre las partes.

En otro orden de cosas, el Secretario de Estado destacó que actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados un proyecto que tiene que ver con la especialización de Salas de las Cortes.

Finalmente, el señor Ministro coincidió en la importancia de que el otorgamiento del privilegio de pobreza sea fruto de un procedimiento expedito y rápido, sobre todo en materia laboral, en que hay diversos plazos de prescripción para el ejercicio de las acciones y derechos, que muchas veces son breves, por lo cual debe ponerse especial atención sobre este particular.

En la última sesión, el Honorable Senador señor Ríos manifestó que, de acuerdo al análisis que se ha hecho y escuchados los planteamientos de las organizaciones invitadas a exponer, no le parece que la normativa del proyecto sea realmente eficaz para solucionar los problemas que afectan a los involucrados en la mayor parte de las situaciones que se producen cotidianamente en el ámbito laboral. Por lo anterior, Su Señoría insistió en la posibilidad de incorporar a los Jueces de Policía Local en el sistema de resolución de conflictos laborales.

Comparte que es necesario modernizar la justicia laboral para que sea más expedita y oportuna, pero estima que la solución planteada en el proyecto no es la adecuada. Debe tenerse presente que más del 80% de estos juicios se dan entre trabajadores y empleadores pertenecientes al sector de las PYMES, y que perfectamente pueden ser asumidos, de manera más simple y directa, por los Jueces de Policía Local,

toda vez que estos últimos ejercen su labor en todas las comunas, lo que implica una gran cercanía con los lugares en que la gente reside y trabaja.

En virtud de lo anterior, el señor Senador consultó al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social si esa Secretaría de Estado estaría dispuesta a avanzar en la línea de lo precedentemente planteado.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social expresó que está en conocimiento de que este tema también se planteó cuando concurrió a la Comisión el señor Ministro de Justicia, y, precisamente, es una de las materias que se van a analizar por el Ejecutivo para los efectos de la discusión en particular.

- Puesto en votación en general el proyecto, se aprobó por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Bombal, Canessa, Parra, Ríos y Ruiz De Giorgio.

El Honorable Senador señor Parra, al fundar su voto afirmativo, consideró que el nuevo procedimiento propuesto en el proyecto es indispensable, y es parte de la reforma global de la justicia laboral junto a las dos iniciativas legales ya despachadas, y que hoy son las leyes números 20.022 y 20.023.

Las objeciones formuladas al articulado de este proyecto son susceptibles de ser consideradas en la discusión en particular. Es evidente que deben introducirse varios perfeccionamientos, pero no hay razones de fondo para no aprobar la idea de legislar.

Agregó que el objetivo del nuevo procedimiento no es sólo abreviar los juicios laborales, sino, también, contar con una justicia más transparente, confiable, oportuna y eficaz, conceptos que están insertos en el conjunto de principios que inspiran esta reforma.

Añadió que las mayores críticas las ha concentrado el procedimiento tutelar, y habrá que tenerlas presente al momento de formular indicaciones, no obstante lo cual, Su Señoría manifestó que el recurso de protección no ofrece solución a los atropellos de que hoy puedan ser víctimas las partes en una relación laboral. Por la misma razón, su impresión es que aquel procedimiento, si bien es de gran interés y conveniencia, debe acotarse mejor, asegurando la seriedad en el ejercicio de la acción, más aun considerando que, en la práctica de los tribunales superiores de justicia, el uso abusivo de la acción de protección ha alterado, en gran medida, el funcionamiento de los mismos.

El Honorable Senador señor Ruiz De Giorgio fundamentó su voto favorable, en primer término, en el hecho de que ninguna de las exposiciones de las entidades que concurrieron invitadas a la

Comisión se pronunció en contra de la idea de legislar, sin perjuicio de las observaciones planteadas en relación con determinadas normas de su articulado, que corresponderá considerar en la discusión en particular.

Destacó que este proyecto de ley no sólo agilizará el procedimiento laboral, que hoy es excesivamente prolongado y engorroso, sino que también hará posible que en un mayor número de juicios se dicte sentencia, por cuanto, de la información entregada en la exposición del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, se connotó que un 60% de las causas que ingresan actualmente a los tribunales del trabajo terminan siendo archivadas o sin que se adopte una resolución definitiva a su respecto, lo que, en la práctica, implica una denegación de justicia.

El señor Senador, en cuanto al procedimiento de tutela laboral, señaló que debe tenerse en cuenta que un número importante de trabajadores, al hacer su presentación ante el tribunal, no dispone de la debida asesoría jurídica y, por ello, muchas veces es desechada por defectos formales, sin que se conozca el fondo, lo cual se corrige con este procedimiento especial.

El Honorable Senador señor Canessa expresó su acuerdo a la aprobación en general del proyecto, por cuanto las correcciones que haya que introducir se harán por la vía de las indicaciones, con motivo de la discusión en particular.

El Honorable Senador señor Ríos manifestó que le ha sido posible votar afirmativamente, puesto que de lo expresado por el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, en orden a que se analizará la posible participación de los Jueces de Policía Local en causas laborales, se abre una alternativa que Su Señoría considera muy importante. La cercanía de la justicia es un elemento relevante para que la gente acceda a ella con facilidad y pueda confiar en una pronta y oportuna solución a sus problemas.

El señor Senador espera que las indicaciones que presente el Ejecutivo, así como las que puedan formular los señores Senadores, solucionen las objeciones que se han hecho presente durante esta discusión en general.

El Honorable Senador señor Bombal fundamentó su voto favorable, señalando que el proyecto está en la línea de lo que es la modernización de la justicia, necesaria también en el ámbito laboral; no obstante, le inquieta que en el procedimiento propuesto subyace un sentido de mayor protección hacia el trabajador, lo que, si bien es razonable respecto de las normas sustantivas del Código del Trabajo -que desarrollan el principio pro trabajador- no lo es en el ámbito judicial, puesto que en él las partes deben tener igualdad de derechos para un debido proceso. En una sociedad moderna, como la nuestra, las relaciones laborales también se han

transformado, y empleadores y trabajadores no deben verse como adversarios, sino que en un plano de cooperación y de mutua confianza.

Su Señoría agregó que en las grandes empresas, prácticamente, no hay conflictos laborales. En mayor medida las dificultades se dan a nivel de la pequeña y mediana empresa y, por ello, hay que cuidar que la normativa propuesta no deje a los empleadores de este último sector en una suerte de indefensión, al no contar con las herramientas necesarias para una debida defensa judicial. De no actuar en consecuencia, aumentará la informalidad y el incumplimiento de la ley, cuestión que no es lo deseable.

Subrayó que, en la discusión en particular, deberá legislarse con acuciosidad, de manera de garantizar un escenario de máxima justicia y de real protección para las partes. Asimismo, es importante abrir mayores espacios para la conciliación, de forma de evitar la judicialización de todos los problemas.

Por último, Su Señoría manifestó su adhesión al planteamiento efectuado por el Honorable Senador señor Ríos, respecto de la necesidad de que el Ejecutivo estudie la eventual participación de los Jueces de Policía Local en la resolución de conflictos laborales.

Finalmente, el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social expresó que el Ejecutivo ha tomado debida nota de los planteamientos que se han efectuado por los señores Senadores y por los invitados que concurrieron a esta Comisión, y manifestó su mejor disposición para estudiar los ajustes que sea pertinente realizar con motivo de la discusión en particular, atendida la trascendencia de la reforma a la justicia laboral.

Coincidió en que en el procedimiento laboral deben existir iguales garantías para las partes, resguardando el debido proceso. Ahora bien, a juicio del Ejecutivo, ello está cautelado en la normativa propuesta, no obstante lo cual expresó su disponibilidad para introducir las precisiones que fueren pertinentes.

Por último, el Secretario de Estado destacó la importancia de que la normativa que, en definitiva se adopte, sea coherente entre lo que es la teoría y la práctica, de modo que no ocurra lo que sucede con el procedimiento actual que, también inspirado en los principios de agilidad y oportunidad, y pese a las modificaciones que se le introdujeron en su momento, no ha respondido a las expectativas y, por ello, ha de ser sustituido.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

A continuación, se transcribe literalmente el texto del proyecto de ley despachado por la Honorable Cámara de Diputados, y que vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social os propone aprobar en general:

PROYECTO DE LEY

“ARTÍCULO 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código del Trabajo:

1. Sustitúyese en el inciso final del artículo 3º, el guarismo “478” por “524”.

2. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 37, el número “477” por “523”.

3. Derógase el inciso final del artículo 44.

4. Sustitúyese en el artículo 86, el guarismo “477” por “523”.

5. Reemplázase en el inciso octavo del artículo 162, el número “477” por “523”.

6. Sustitúyese el inciso final de la letra a), del artículo 169, por el siguiente:

“Si tales indemnizaciones no se pagaren al trabajador, éste podrá recurrir al tribunal que corresponda, para que en procedimiento ejecutivo se cumpla dicho pago, pudiendo el juez en este caso incrementarlas hasta en un 150%, y”.

7. Reemplázase el artículo 292, por el siguiente:

“Artículo 292.- Las prácticas antisindicales o desleales serán sancionadas con multas de cien a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales, teniéndose en cuenta para determinar su cuantía la gravedad de la infracción y la circunstancia de tratarse o no de una reiteración.

Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales o antisindicales se sustanciará conforme las normas establecidas en el Párrafo 6º, del Capítulo II, del Título I, del Libro V, del presente Código.

La Inspección del Trabajo deberá denunciar al tribunal competente los hechos que estime constitutivos de prácticas antisindicales o desleales, de los cuales tome conocimiento.

Si la práctica antisindical hubiere implicado el despido de un trabajador respecto de quien se haya acreditado que se encuentra amparado por el fuero establecido en los artículos 221, 224, 229, 238, 243 y 309, el juez, en su primera resolución deberá disponer, de oficio o a petición de parte, la inmediata reincorporación del trabajador a sus labores y el pago de las remuneraciones y demás prestaciones derivadas de la relación laboral durante el período comprendido entre la fecha del despido y aquélla en que se materialice la reincorporación, todo ello, bajo apercibimiento de multa de cien a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales.

Para los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso precedente, el tribunal señalará en la resolución que decrete la reincorporación el día y la hora en que ésta se deberá cumplir y el funcionario que la practicará, pudiendo encargar dicha diligencia a un funcionario de la Inspección del Trabajo designado por ésta. Asimismo, dispondrá que se acredite dentro de los cinco días siguientes a la reincorporación el pago de las remuneraciones y demás prestaciones adeudadas, aplicándose a este respecto la forma de establecer las remuneraciones a que se refiere el artículo 71.

En caso de negativa del empleador a dar cumplimiento cabal a la orden de reincorporación o ante una nueva separación o no pago oportuno y debido de las remuneraciones y demás prestaciones laborales, el tribunal, de oficio, hará efectivos los apercibimientos con que se hubiese decretado la medida de reincorporación, sin perjuicio de sustituir o repetir el apremio hasta obtener el cumplimiento íntegro de la medida decretada.

Contra estas resoluciones no procederá recurso alguno.”.

8. Reemplázase el artículo 294, por el siguiente:

“Artículo 294.- Si una o más de las prácticas antisindicales o desleales establecidas en este Libro o en el Título VIII, del Libro IV, han implicado el despido de trabajadores no amparados por fuero

laboral, éste no producirá efecto alguno y se aplicará lo dispuesto en el artículo 506.”.

9. Sustitúyese en la letra c) del artículo 314 bis, el guarismo “477” por “523”.

10. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 314 bis A, el número “477” por “523”.

11. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 332, la expresión “Título II del libro V” por la siguiente: “Párrafo 7º, del Capítulo II, del Título I, del Libro V”.

12. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 349:

a) Sustitúyese en el inciso primero, la expresión final “artículo 461 de este Código”, por la siguiente: “Párrafo 4º, del Capítulo II, del Título I, del Libro V, del presente Código.”; y

b) Reemplázase en el inciso segundo la expresión final “Título II del libro V” por la siguiente: “Párrafo 7º, del Capítulo II, del Título I, del Libro V, del presente Código.”.

13. Reemplázase el artículo 389 por el siguiente:

“Artículo 389.- Las infracciones señaladas en los artículos precedentes serán sancionadas con multas de cien a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales, teniéndose en cuenta para determinar su cuantía la gravedad de la infracción y la circunstancia de tratarse o no de una reiteración.

Las multas a que se refiere el inciso anterior serán a beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

El conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales en la negociación colectiva se sustanciará conforme a las normas establecidas en el Párrafo 6º, del Capítulo II, del Título I, del Libro V, del presente Código.

La Inspección del Trabajo deberá denunciar al tribunal competente los hechos que estime constitutivos de prácticas desleales en la negociación colectiva, de los cuales tome conocimiento.”.

14. Intercálase, a continuación del artículo 390, el siguiente artículo 390 bis, nuevo:

“Artículo 390 bis.- La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas desleales en la negociación colectiva, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras. Para este efecto, el tribunal enviará a la Dirección del Trabajo copia de los respectivos fallos.”.

15. Reemplázase la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo por la siguiente:

“c) las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas de previsión y/o seguridad social, planteadas por pensionados o trabajadores activos, salvo en lo referido a la revisión de las resoluciones sobre declaración de invalidez o del pronunciamiento sobre otorgamiento de licencias médicas;”.

16. Reemplázanse el Capítulo II, del Título I y el Título II, del Libro V, por el siguiente Capítulo II, nuevo:

“Capítulo II

De los principios formativos del proceso y del procedimiento en juicio del trabajo

Párrafo 1º

De los principios formativos del proceso

Artículo 425.- Los procedimientos del trabajo serán orales, públicos y concentrados. Primarán en ellos los principios de la inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe, bilateralidad de la audiencia y gratuidad.

Todas las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones expresamente contenidas en esta ley.

Las actuaciones realizadas oralmente, por o ante el juez de la causa serán registradas por cualquier medio apto para producir fe que no implique escrituración y que permita garantizar la fidelidad, conservación y reproducción de su contenido. Se considerarán válidos, para estos efectos, la grabación en medios de reproducción fonográfica, audiovisual o electrónica. La audiencia deberá ser registrada íntegramente, como asimismo todas las resoluciones, incluyendo la sentencia, que dicte el juez fuera de ella.

Artículo 426.- Las audiencias se desarrollarán en su totalidad ante el juez de la causa, el que las presidirá y no podrá delegar su ministerio. El incumplimiento de este deber será sancionado con la nulidad

insaneable de las actuaciones y de la audiencia, la que deberá declarar el juez de oficio o a petición de parte.

Sin embargo, en los juzgados de letras que cuenten con un juez y un secretario, y sólo cuando la Corte de Apelaciones respectiva no ejerza la atribución que le confiere el artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales, el juez, cuando hubiere retardo en el despacho de los asuntos sometidos al conocimiento del tribunal o cuando el mejor servicio judicial así lo exigiere, podrá autorizar al secretario para que, en calidad de subrogante, asuma en todo el curso del juicio. En este caso, sólo él podrá presidir la audiencia y dictar el fallo correspondiente, aplicándose a su respecto lo señalado en el inciso primero.

Artículo 427.- Los actos procesales serán públicos y deberán realizarse con la celeridad necesaria, procurando abreviar los plazos cuando ello esté autorizado por ley, concentrando en un solo acto aquellas diligencias en que esto sea posible.

Artículo 428.- El tribunal, una vez reclamada su intervención en forma legal, actuará de oficio. Decretará las pruebas que estime necesarias, aun cuando no las hayan ofrecido las partes y rechazará aquéllas que considere inconducentes. De esta resolución se podrá deducir recurso de reposición en la misma audiencia. Adoptará, asimismo, las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso o su prolongación indebida y, en consecuencia, no será aplicable el abandono del procedimiento.

El tribunal corregirá de oficio los errores que observe en la tramitación del juicio y adoptará las medidas que tiendan a evitar la nulidad del procedimiento. La nulidad procesal sólo podrá ser decretada si el vicio hubiese ocasionado perjuicio al litigante que la reclama o si no fuese susceptible de ser subsanado por otro medio. En el caso previsto en el artículo 426, el tribunal no podrá excusarse de decretar la nulidad.

Artículo 429.- Los actos procesales deberán ejecutarse de buena fe, facultándose al tribunal para adoptar las medidas necesarias para impedir el fraude, la colusión, el abuso del derecho y las actuaciones dilatorias.

Se entenderá por actuaciones dilatorias todas aquellas que con el sólo objeto de demorar la prosecución del juicio sean intentadas por alguna de las partes. De la resolución que declare como tal alguna actuación, la parte afectada podrá reponer para que sea resuelta en la misma audiencia.

Si tres actuaciones fueren declaradas como dilatorias, y la reposición, si se presentare, fuere rechazada, el juez no admitirá otra a tramitación.

Artículo 430.- En las causas laborales, toda actuación, trámite o diligencia del juicio, realizada por funcionarios del tribunal será gratuita para las partes. El juez será responsable disciplinariamente de la estricta observancia tanto de esta gratuidad como del oportuno cumplimiento de las diligencias.

Las partes que gocen de privilegio de pobreza tendrán derecho a defensa letrada gratuita por parte de las respectivas Corporaciones de Asistencia Judicial o, en su defecto, por un abogado de turno y, asimismo, a que todas las actuaciones en que deban intervenir auxiliares de la administración de justicia se cumplan oportuna y gratuitamente.

Artículo 431.- En la interpretación de las normas procesales, el tribunal deberá tener siempre presente que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustantivos de las partes.

Párrafo 2º Reglas Comunes

Artículo 432.- En todo lo no regulado por esta ley, serán aplicables supletoriamente las normas contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas sean contrarias a los principios que informan este procedimiento. En tal caso, el tribunal dispondrá la forma en que se practicará la actuación respectiva.

Artículo 433.- Siempre que alguna de las partes lo solicite para sí, y el tribunal acceda a ello, las actuaciones procesales, a excepción de la audiencia, podrán realizarse por medios electrónicos que permitan su adecuada recepción, registro y control.

Artículo 434.- Las partes deberán comparecer con patrocinio de abogado y representadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio.

Artículo 435.- Los plazos que se establecen en este Libro son fatales, tanto para las partes como para el Juez de la causa, cualquiera que sea la forma en que se expresen. En consecuencia, la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar un acto se extingue, por el solo ministerio de la ley.

En estos casos, el tribunal, de oficio o a petición de parte, proveerá lo que convenga para la prosecución del juicio, sin necesidad de certificado previo.

Los términos de días que establece este título se entenderán suspendidos durante los días feriados, salvo que el tribunal, por motivos justificados y en resolución fundada, haya dispuesto expresamente lo contrario.

El feriado de vacaciones a que se refiere el artículo 313 del Código Orgánico de Tribunales no regirá respecto de las causas laborales.

Artículo 436.- La primera notificación a la parte demandada deberá hacerse personalmente, entregándosele copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído. Al demandante se le notificará por el estado diario.

Esta notificación se practicará por el receptor laboral o por el funcionario que el juez determine, atendiendo a las circunstancias del lugar en que funcione el tribunal y restantes consideraciones que miren a la eficacia de la actuación. La parte interesada podrá siempre encargar a su costa la práctica de la notificación a un receptor judicial.

En los lugares y recintos de libre acceso público la notificación personal se podrá efectuar en cualquier día y a cualquier hora, procurando causar la menor molestia al notificado.

Además, la notificación personal se podrá efectuar en cualquier día, entre las seis y las veintidós horas, en la morada o lugar donde pernocta el notificado, en el lugar donde ordinariamente ejerce su industria, profesión o empleo, o en el recinto del tribunal.

El juez podrá, por motivos fundados, ordenar que la notificación se practique en horas diferentes a las indicadas en el inciso anterior.

Si la notificación se realizare en día inhábil, los plazos comenzarán a correr desde las cero horas del día hábil inmediatamente siguiente. Los plazos se aumentarán en la forma establecida en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 437.- En los casos en que no resulte posible practicar la notificación personal, por no ser habida la persona a quien debe notificarse y siempre que el ministro de fe encargado de la diligencia establezca cuál es su habitación o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo y, tratándose de persona natural, que se

encuentra en el lugar del juicio, de lo que dejará constancia en el expediente, se procederá a su notificación en el mismo acto y sin necesidad de nueva orden del tribunal, entregándose las copias a que se refiere el inciso primero del artículo precedente a cualquier persona adulta que se encuentre en la morada o en el lugar donde la persona a quien debe notificarse habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo. Si, por cualquier causa, ello no fuere posible, la notificación se hará fijando, en lugar visible, un aviso que dé noticia de la demanda, con especificación exacta de las partes, materia de la causa, juez que conoce de ella y resoluciones que se notifican. En caso que la habitación o el lugar en que pernocta la persona a quien debe notificarse, o aquel donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo, se encuentre en un edificio o recinto al que no se permite libre acceso, el aviso y las copias se entregarán al portero o encargado del edificio, dejándose testimonio expreso de esta circunstancia.

El ministro de fe dará aviso de esta notificación a ambas partes, el mismo día en que se efectúe o a más tardar el día hábil siguiente, dirigiéndoles carta certificada. La omisión en el envío de la carta no invalidará la notificación, pero hará responsable al infractor de los daños y perjuicios que se originen y el tribunal, previa audiencia del afectado, deberá imponerle alguna de las medidas que se señalan en los números 2, 3 y 4 del artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 438.- Cuando se notifique la demanda a un trabajador en el lugar donde ordinariamente preste sus servicios, deberá efectuarse siempre en persona, si dicho lugar corresponde a la empresa, establecimiento o faena que dependa del empleador con el cual litigue.

Artículo 439.- Cuando la demanda deba notificarse a persona cuya individualización o domicilio sean difíciles de determinar o que por su número dificulten considerablemente la práctica de la diligencia, el juez dispondrá otra forma de notificación, por cualquier medio idóneo que garantice el derecho a la defensa y los principios de igualdad y de bilateralidad de la audiencia.

Si se dispone que la notificación se practique por aviso, éste se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, conforme a un extracto emanado del tribunal, el que contendrá un resumen de la demanda y copia íntegra de la resolución recaída en ella. El aviso se publicará en la edición del Diario Oficial de los días 1 o 15 de cualquier mes o al día siguiente hábil, si el diario no se publicare en esos días, y será gratuito para los trabajadores que soliciten la notificación.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el juez, fundadamente, podrá ordenar que la notificación por avisos, se realice, además, en otro diario o periódico.

Artículo 440.- Las restantes notificaciones se practicarán por el estado diario, en la forma que establece el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil, salvo que se trate de resoluciones en que se ordene la comparecencia personal de las partes, que no hayan sido expedidas en el curso de una audiencia, las que se notificarán por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas el quinto día siguiente a la fecha de entrega de la carta en la oficina de correos, de lo que se dejará constancia.

Para los efectos de practicar las notificaciones por carta certificada a que hubiere lugar, todo litigante deberá designar un lugar conocido dentro de los límites urbanos de la ciudad en que funcione el tribunal respectivo y esta designación se considerará subsistente mientras no haga otra la parte interesada.

Respecto de las partes que no hayan efectuado la designación a que se refiere el inciso precedente, las resoluciones que debieron notificarse por carta certificada lo serán por el estado diario, sin necesidad de petición de parte y sin previa orden del tribunal.

Salvo la primera notificación al demandado, las restantes podrán ser efectuadas, a petición de la parte interesada, en forma electrónica o por cualquier otro medio que ésta señale. En este caso, se dejará debida constancia de haberse practicado la notificación en la forma solicitada.

Artículo 441.- Los incidentes de cualquier naturaleza deberán promoverse en la audiencia y resolverse de inmediato, salvo que el tribunal estime pertinente dejar su resolución para la sentencia definitiva.

Artículo 442.- En el ejercicio de su función cautelar, el juez decretará todas las medidas que estime necesarias para asegurar el resultado de la acción, así como para la protección de un derecho o la identificación de los obligados y la singularización de su patrimonio.

Las medidas cautelares podrán llevarse a efecto antes de notificarse a la persona contra quien se dicten, siempre que existan razones graves para ello y el tribunal así lo ordene. Transcurridos cinco días sin que la notificación se efectúe, quedarán sin valor las diligencias practicadas.

Las medidas precautorias se podrán disponer en cualquier estado de tramitación de la causa, aun cuando no esté contestada la demanda e incluso antes de su presentación. En ambos casos, se podrán otorgar siempre que se acredite razonablemente el fundamento del derecho

que se reclama, sin necesidad de acreditar la insolvencia del afectado, ni exigir fianza o garantía alguna al solicitante. Si presentada la demanda, persistieran las circunstancias que motivaron su adopción, se mantendrán como precautorias. Si no se presentara la demanda en el término de diez días, contado desde la fecha en que se hizo efectiva, la medida caducará de pleno derecho y el solicitante quedará por este hecho responsable de los perjuicios que se hubieran causado. Con todo, por motivos fundados, como cuando existan evidencias del inminente término de la empresa o de su insolvencia, el juez podrá prorrogar las medidas prejudiciales precautorias por el plazo prudencial que estime necesario.

Habiendo sido notificada la demanda, la función cautelar del tribunal comprenderá la de requerir información de organismos públicos, empresas u otras personas jurídicas o naturales, sobre cualquier antecedente que a criterio del juez contribuya al objetivo perseguido, incluidos los que digan relación con deudas, créditos, bienes, valores y otros derechos de las partes, así como los de sus empresas o personas relacionadas o que tengan interés en ella.

Artículo 443.- En toda resolución que ponga término a la causa o resuelva un incidente, el juez deberá pronunciarse sobre el pago de las costas del procedimiento, tasando las procesales y regulando las personales, según proceda.

Cuando el trabajador ha litigado con privilegio de pobreza, las costas personales a cuyo pago sea condenada la contraparte pertenecerán a la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o al abogado de turno.

Párrafo 3º

Del procedimiento de aplicación general

Artículo 444.- La demanda se interpondrá por escrito y deberá contener:

1. La designación del tribunal ante quien se entabla;
2. El nombre, apellidos, domicilio y profesión u oficio del demandante y en su caso de las personas que lo representen, y naturaleza de la representación;
3. El nombre, apellidos, domicilio y profesión u oficio del demandado;

4. La exposición clara de los hechos y consideraciones de derecho en que se fundamenta, y

5. La enunciación precisa y concreta de las peticiones que se someten a la resolución del tribunal.

Conjuntamente con la demanda se podrán acompañar instrumentos y solicitar las diligencias de prueba que se estimen necesarias.

En materias de seguridad social, cuando se demande a una institución de previsión o seguridad social, deberá acompañarse la resolución final de la respectiva entidad o de la entidad fiscalizadora según corresponda, que se pronuncia sobre la materia que se demanda, de conformidad al procedimiento administrativo establecido en la ley N° 19.880.

Cuando se demanden períodos de cotizaciones de seguridad social impagas, el juez de la causa al conferir el traslado de la demanda, deberá ordenar la notificación de ella a la o las instituciones de seguridad social a las que corresponda percibir la respectiva cotización. Dicha notificación se efectuará a través de carta certificada, la que contendrá copia íntegra de la demanda y de la resolución recaída en ella o un extracto si fueren muy extensas. Estas notificaciones se entenderán practicadas el tercer día siguiente a aquel en que sea expedida la carta, debiendo dejarse constancia en el expediente de la fecha del envío.

Artículo 445.- El juez, de oficio, advertirá a la parte de los defectos u omisiones en que haya incurrido en la demanda conforme al artículo anterior, a fin de que los subsane dentro del plazo de quinto día, bajo el apercibimiento de tenerse por no presentada la demanda si así no lo hiciese. De la misma forma, cuando se estime incompetente para conocer de la demanda, lo declarará así, señalando el tribunal competente, y enviándole los antecedentes.

Si de los datos aportados en la demanda se desprendiere claramente la caducidad de la acción, el tribunal deberá declararlo de oficio y no admitirá a tramitación la demanda.

En materias de previsión o seguridad social, el juez admitirá la demanda a tramitación, sólo si el actor ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo precedente, de lo contrario, deberá rechazar de plano dicha demanda.

Artículo 446.- El actor podrá acumular en su demanda todas las acciones que le competan en contra de un mismo demandado, aunque procedan de distintos títulos.

En el caso de aquellas acciones que corresponda tramitar de acuerdo a procedimientos distintos, se deberán deducir de conformidad a las normas pertinentes y si una dependiere de la otra, no correrá el plazo para ejercer aquella hasta ejecutoriado que sea el fallo de ésta.

Artículo 447.- Si ante el mismo tribunal se tramitaren varias demandas contra un mismo demandado y las acciones sean idénticas, aunque los actores sean distintos, el juez de oficio o a petición de parte podrá decretar la acumulación de autos, siempre que no implique retardo para uno o más de ellos.

Con todo, el juez tendrá siempre la facultad de desacumular los autos.

Artículo 448.- Admitida la demanda a tramitación, el tribunal deberá, de inmediato y sin más trámite, citar a las partes a una audiencia única a fin de que tengan lugar los actos de conciliación y juicio, fijando para tal efecto, dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha de la resolución, el día y la hora para su celebración, debiendo mediar entre la notificación de la demanda y citación, y la celebración de la audiencia, a lo menos, quince días.

El plazo para la realización de la audiencia a que se refiere el inciso anterior, se aumentará en la misma forma establecida en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 449.- En la citación se hará constar que la audiencia se celebrará con las partes que asistan, afectándole a aquélla que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior notificación. Asimismo, deberá indicarse en la citación que las partes deberán concurrir con todos sus medios de prueba.

En el evento de solicitarse diligencias de prueba en la demanda, el tribunal, conjuntamente con la citación, deberá pronunciarse sobre la pertinencia de la prueba solicitada y dispondrá las citaciones o requerimientos que sean necesarios, lo que se efectuará de inmediato mediante el envío de carta certificada dirigida al domicilio indicado por el solicitante.

Las partes podrán concurrir a la audiencia por intermedio de mandatario, el que se entenderá de pleno derecho facultado para transigir, sin perjuicio de la asistencia de sus apoderados y abogados.

Artículo 450.- Iniciada la audiencia, ésta no podrá suspenderse.

Excepcionalmente, y sólo en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, el juez podrá, mediante resolución fundada, suspender la audiencia. En el mismo acto deberá fijar nuevo día y hora para su realización.

El tribunal deberá habilitar horarios especiales en caso de que el desarrollo de la audiencia exceda al horario normal de su funcionamiento.

Artículo 451.- La audiencia comenzará con el llamado a conciliación por parte del juez, a cuyo objeto deberá proponer a las partes las bases para un posible acuerdo, sin que las opiniones que emita al efecto sean causal de inhabilitación.

Producida la conciliación, sea ésta total o parcial, deberá dejarse constancia de ella en el acta respectiva, la que suscribirán el juez y las partes, estimándose lo conciliado como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

Se formará cuaderno separado, si fuere necesario, para el cobro de las sumas resultantes de la conciliación parcial.

Artículo 452.- Si no se produjere conciliación o ésta es sólo parcial, se dará inicio inmediatamente al acto de juicio, comenzando el demandante con la ratificación oral de la demanda. Acto seguido, el demandado contestará la demanda en forma oral, pronunciándose específicamente sobre los hechos contenidos en la misma, aceptando o negándolos en forma expresa y concreta. Opondrá, asimismo, las excepciones perentorias o dilatorias que estime procedentes y los hechos en que se fundan, y la enunciación precisa y clara de las peticiones que se someten a la decisión del tribunal.

El demandado deberá acompañar al tribunal, al menos con cinco días de anticipación a la fecha de realización de la audiencia, una minuta en la que se contengan sus alegaciones. La contestación no podrá contener otras alegaciones que las formuladas en la minuta.

Artículo 453.- Cuando el demandado no concurriere a la audiencia, o de hacerlo no negare en su contestación algunos de los hechos contenidos en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, podrá estimarlos como tácitamente admitidos.

Si el demandado se allanare a una parte de la demanda y se opusiera a otras, se continuará con el curso de la demanda sólo en la parte que hubo oposición. Para estos efectos, el tribunal deberá

establecer los hechos sobre los cuales hubo conformidad, estimándose esta resolución como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

Se formará cuaderno separado, si fuere necesario, para el cobro de las sumas resultantes de la sentencia parcial a que se refiere el inciso precedente.

Artículo 454.- Todas las excepciones se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva.

No obstante lo anterior, el tribunal deberá pronunciarse de inmediato, una vez evacuado el traslado correspondiente, respecto de las excepciones de incompetencia, de falta de capacidad o de personería del demandante, de ineptitud del libelo, de caducidad, de prescripción o aquella en que se reclame del procedimiento, siempre que ellas aparezcan manifiestamente admisibles. Cuando ello sea procedente, se suspenderá la audiencia por el plazo de cinco días a fin de que se subsanen los defectos u omisiones, bajo el apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio.

Se podrá, además, deducir reconvención cuando el tribunal sea competente para conocer de ella como demanda y siempre que tenga por objeto enervar la acción deducida o esté íntimamente ligada con ella. La reconvención deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 444 y se tramitará conjuntamente con la demanda. Dicha reconvención se deberá acompañar al tribunal, conjuntamente con la minuta de alegaciones y en el mismo plazo señalado para ella, debiendo ratificarse en forma oral en la audiencia.

De la reconvención y excepciones opuestas se dará traslado en la misma audiencia al demandante para su contestación oral.

Artículo 455.- Contestada que sea la demanda sin que se haya opuesto reconvención o excepciones dilatorias o evacuado el traslado conferido de haberse interpuesto éstas, el tribunal recibirá de inmediato la causa a prueba, cuando ello fuere procedente. En contra de esta resolución y de la que no diere lugar a ella sólo procederá el recurso de reposición, el que deberá interponerse y fallarse de inmediato.

De no haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos el tribunal dará por concluida la audiencia y procederá a dictar sentencia en conformidad a lo dispuesto en el artículo 470.

Artículo 456.- Las partes deberán concurrir a la audiencia con todos sus medios de prueba, pudiendo valerse de todos aquellos regulados en la ley. Pueden también ofrecer cualquier otro elemento de convicción que, a juicio del tribunal, fuese pertinente.

Sólo se admitirán las pruebas que tengan relación directa con el asunto sometido al conocimiento del tribunal y siempre que sean necesarias para su resolución.

El juez resolverá en el acto sobre la pertinencia de la prueba ofrecida y de las preguntas formuladas por las partes, así como de toda objeción o protesta planteada a este respecto, de la que se dejará constancia en el acta a solicitud de la parte interesada.

Con todo, carecerán de valor probatorio y, en consecuencia, no podrán ser apreciadas por el tribunal, las pruebas que las partes aporten y que se hubieren obtenido directa o indirectamente por medios ilícitos o a través de actos que impliquen violación de derechos fundamentales.

Artículo 457.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 444, las partes podrán solicitar, con al menos cinco días de antelación a la fecha fijada para la realización de la audiencia, aquellas pruebas que, debiendo practicarse en la misma, requieran diligencias de citación o requerimiento.

Las citaciones señaladas en el inciso anterior deberán practicarse por medio de carta certificada al domicilio de quien deba prestar la prueba requerida, el cual deberá ser señalado por el solicitante de la misma.

La resolución que cite a absolver posiciones se notificará por cédula, con a lo menos tres días de antelación a la celebración de la respectiva audiencia. Si alguna de las partes no ha señalado domicilio, la resolución señalada en el presente inciso se le notificará por el estado diario.

La citación de los testigos deberá practicarse por carta certificada, con a lo menos tres días de antelación a la fecha fijada para la celebración de la audiencia, en el domicilio señalado por cada una de las partes que presenta la testimonial.

La absolución de posiciones sólo podrá pedirse una vez por cada parte.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando se decrete la remisión de oficios o el informe de peritos, el juez podrá recurrir a cualquier medio idóneo de comunicación o de transmisión de textos que permita la pronta práctica de las diligencias, debiendo adoptar las medidas necesarias para asegurar su debida recepción por el requerido, dejando constancia en el expediente.

El tribunal sólo dará lugar a la petición de oficios cuando se trate de requerir información objetiva, pertinente y específica sobre los hechos materia del juicio. Cuando la información se solicite respecto de entidades públicas, el oficio deberá dirigirse a la oficina o repartición en cuya jurisdicción hubieren ocurrido los hechos o deban constar los antecedentes sobre los cuales se pide informe. Las personas o entidades públicas o privadas a quienes se dirija el oficio estarán obligadas a evacuarlo dentro del plazo que fije el tribunal, el que en todo caso no podrá exceder al día anterior al fijado para la audiencia, y en la forma que éste lo determine, pudiendo al efecto disponer cualquier medio idóneo de comunicación o de transmisión de textos.

En el mismo plazo señalado en el inciso primero, deberán acompañarse los instrumentos que no se hubiesen presentado con anterioridad.

Artículo 458.- La rendición de la prueba comenzará con la ofrecida por el demandante y luego con la del demandado.

No obstante lo anterior, en los juicios sobre despido corresponderá en primer lugar al demandado la rendición de la prueba, debiendo acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto, del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido.

El orden de recepción de las pruebas será el siguiente: documental, confesional, testimonial y los otros medios ofrecidos, sin perjuicio de que el tribunal pueda modificarlo por causa justificada.

Artículo 459.- La impugnación de la prueba instrumental acompañada deberá formularse en forma oral durante la audiencia.

La exhibición de instrumentos que hubiese sido ordenada por el tribunal se verificará en la audiencia. Cuando, sin causa justificada, se omita la presentación de aquellos que legalmente deban obrar en poder de una las partes, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba decretada.

Artículo 460.- Si el llamado a confesar no compareciese a la audiencia sin causa justificada o compareciendo se negase a declarar o diese respuestas evasivas, podrán presumirse efectivos los hechos alegados por la parte contraria en la demanda o contestación, según corresponda, siempre que hubiere sido apercebido sobre tal efecto.

La persona citada a absolver posiciones estará obligada a concurrir personalmente a la audiencia, a menos que designe especialmente un mandatario para tal objeto, el que si representa al empleador deberá tratarse de una de las personas a que se refiere el artículo 4º de este Código. La designación del mandatario deberá constar por escrito y hacerse con anticipación al inicio de la audiencia, considerándose sus declaraciones para todos los efectos legales como si hubieren sido hechas personalmente por aquél cuya comparecencia se solicitó.

Si los demandantes fueren varios y se solicitare la citación a confesar en juicio de muchos o de todos ellos, el juez podrá reducir el número de quienes habrán de comparecer, en especial cuando estime que sus declaraciones puedan resultar una reiteración inútil sobre los mismos hechos.

Artículo 461.- Las posiciones para la prueba confesional se formularán verbalmente, sin admisión de pliegos y deberán ser pertinentes a los hechos sobre los cuales debe versar la prueba y expresarse en términos claros y precisos, de manera que puedan ser entendidas sin dificultad. El tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá rechazar las preguntas que no cumplan con dichas exigencias.

El juez podrá formular a los absolventes las preguntas que estime pertinente, así como ordenarles que precisen o aclaren sus respuestas.

Artículo 462.- Los testigos podrán declarar únicamente ante el tribunal que conozca de la causa. Serán admitidos a declarar sólo hasta cuatro testigos por cada parte. En caso de que se haya ordenado la acumulación de autos el número de testigos admitidos a declarar será determinado por el tribunal, no pudiendo en ningún caso ser inferior a cuatro.

El juez podrá reducir el número de testigos de cada parte e incluso prescindir de la prueba testimonial cuando sus manifestaciones pudieren constituir inútil reiteración sobre hechos suficientemente esclarecidos.

Los testigos declararán bajo juramento o promesa de decir verdad en juicio. El juez, en forma expresa y previa a su declaración, deberá poner en conocimiento del testigo las sanciones contempladas en el artículo 209 del Código Penal, por incurrir en falso testimonio.

Los testigos no podrán ser tachados. Únicamente en la oportunidad a que se refiere el artículo 464, las partes podrán hacer las observaciones que estimen oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones.

Artículo 463.- El tribunal y las partes podrán formular a los testigos las preguntas que estimen necesarias para el esclarecimiento de los hechos sobre los que versa el juicio. Podrán asimismo, exigir que los testigos aclaren o precisen sus dichos.

Estas preguntas no podrán formularse en forma asertiva, ni contener elementos de juicio que determinen la respuesta, ni referirse a hechos o circunstancias ajenas al objeto de la prueba, lo que calificará el tribunal sin más trámite.

Artículo 464.- Practicada la prueba, las partes formularán, oralmente, en forma breve y precisa, las observaciones que les merezcan las pruebas rendidas y sus conclusiones.

Con todo, si a juicio del juez hubieren puntos no suficientemente esclarecidos podrá ordenar a las partes que los aclaren.

Artículo 465.- Durante la celebración de la audiencia se extenderá el acta correspondiente, en la que se hará constar:

a) El lugar, fecha e individualización del tribunal y de las partes comparecientes, de sus apoderados y abogados;

b) Un resumen suficiente del acto de conciliación;

c) Un resumen suficiente de las alegaciones de las partes, y

d) Un resumen suficiente de la prueba confesional y testimonial; la relación circunstanciada de los instrumentos presentados o los datos que permitan identificarlos, y toda otra prueba aportada por las partes y de las incidencias planteadas respecto de todas ellas.

El juez, resolverá en el acto y sin ulterior recurso cualquier observación que se hiciera sobre el contenido del acta.

Una vez extendida el acta o resuelta las objeciones, será firmada por el juez, las partes, sus apoderados y abogados, entregándose copia de la misma a las partes.

Artículo 466.- En el evento de existir alguna diligencia pendiente, que haya sido solicitada por alguna de las partes, y que no pudo llevarse a cabo en la audiencia, el tribunal, por resolución fundada, y sólo si la estima estrictamente necesaria para la acertada resolución de la causa, la podrá reiterar como medida para mejor resolver de conformidad a lo

dispuesto en el artículo siguiente, requiriendo su cumplimiento por cualquier medio idóneo.

Artículo 467.- A partir de la contestación de la demanda y hasta el término de la audiencia el tribunal podrá, de oficio y por resolución fundada, decretar las medidas necesarias para formarse plena convicción sobre los hechos de la causa y su adecuada resolución. Dichas medidas podrán consistir en la agregación de documentos, confesión judicial de las partes, inspección personal del tribunal, informe de peritos, comparecencia de testigos, exhibición de otros autos que tengan relación con el juicio, informe de los organismos públicos a los cuales la ley asigna la facultad de interpretar la legislación laboral y de seguridad social sobre jurisprudencia administrativa que hubieren emitido, y en cualesquiera otras que estime necesarias.

No será impedimento para la dictación del fallo el hecho de encontrarse pendiente alguna de las diligencias señaladas en el inciso precedente.

Las resoluciones dictadas en conformidad a lo dispuesto en este artículo y al precedente serán inapelables.

Artículo 468.- El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Las presunciones simplemente legales se apreciarán también en la misma forma.

Artículo 469.- Al apreciar las pruebas según la sana crítica, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

Artículo 470.- El juez podrá pronunciar el fallo al término de la audiencia o dentro del plazo de décimo quinto día, contado desde la realización de ésta, en cuyo caso citará a las partes para notificarlas, fijando día y hora al efecto, dentro del mismo plazo. En esta segunda alternativa, podrá el juez anunciar las bases fundamentales del fallo al término de la referida audiencia.

Las partes se entenderán notificadas de la sentencia, sea en la audiencia o en la actuación prevista al efecto, hayan o no asistido a ellas.

Artículo 471.- La sentencia definitiva se pronunciará sobre las acciones y excepciones deducidas que no se hubieren resuelto con anterioridad y sobre los incidentes en su caso, o sólo sobre estos cuando sean previos e incompatibles con aquellas.

Artículo 472.- La sentencia definitiva deberá contener:

- 1.- El lugar y fecha en que se expida;
- 2.- La individualización completa de las partes litigantes;
- 3.- Una síntesis de los hechos y de las alegaciones de las partes;
- 4.- El análisis de la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación;
- 5.- Los preceptos constitucionales, legales o los contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, las consideraciones jurídicas y los principios de derecho o de equidad en que el fallo se funda;
- 6.- La resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal, con expresa determinación de las sumas que ordene pagar o las bases necesarias para su liquidación, si ello fuere procedente, y
- 7.- El pronunciamiento sobre el pago de costas y, en su caso, los motivos que tuviere el tribunal para absolver de su pago a la parte vencida.

La sentencia que se dicte en la audiencia, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 470, sólo deberá cumplir con los requisitos de los números 2, 5, 6 y 7.

Artículo 473.- Si el juez que presidió la audiencia no pudiese dictar sentencia, éste deberá celebrarse nuevamente.

Artículo 474.- La sentencia de término será notificada a los entes administradores de los respectivos sistemas de seguridad social, con el objeto que éstos hagan efectivas las acciones contempladas en la ley N° 17.322 o en el decreto ley N° 3.500, según corresponda.

Estos organismos deberán remitir al tribunal de la causa copia de las demandas ejecutivas que deduzcan, sin perjuicio de la

facultad del juez de requerir información sobre el estado de avance de la ejecución.

Artículo 475.- Una vez firme y ejecutoriada la sentencia, lo que deberá certificar de oficio el tribunal, y siempre que no se acredite su cumplimiento dentro del término de cinco días, se dará inicio a su ejecución de oficio por el tribunal de conformidad a lo dispuesto en los artículos siguientes.

Párrafo 4º

Del cumplimiento de la sentencia y de la ejecución de los títulos ejecutivos laborales

Artículo 476.- La ejecución de los títulos ejecutivos laborales se tramitará de oficio por el tribunal, dictándose al efecto las resoluciones y ordenándose las diligencias que sean necesarias para ello.

Artículo 477.- Son títulos ejecutivos laborales:

- 1.- Las sentencias ejecutoriadas;
- 2.- Los equivalentes jurisdiccionales que cumplan con las formalidades establecidas en la ley;
- 3.- Los finiquitos suscritos por el trabajador y el empleador y autorizados por el Inspector del Trabajo o por funcionarios a los cuales la ley los faculta para actuar como ministros de fe en el ámbito laboral;
- 4.- Las actas firmadas por las partes, y autorizadas por los Inspectores del Trabajo y que den constancia de acuerdos producidos ante éstos o que contengan el reconocimiento de una obligación laboral o de cotizaciones de seguridad social, o sus copias certificadas por la respectiva Inspección del Trabajo;
- 5.- Los originales de los instrumentos colectivos del trabajo y las copias auténticas de las mismas autorizadas por la Inspección del Trabajo, y
- 6.- Cualquier otro título a que las leyes laborales o de seguridad social otorguen fuerza ejecutiva.

Artículo 478.- En las causas laborales el cumplimiento de la sentencia se sujetará a las normas del presente Párrafo y a falta de disposición expresa en este texto o en leyes especiales, se aplicarán supletoriamente las normas del Título XIX del Libro I del Código de

Procedimiento Civil, siempre que dicha aplicación no vulnere los principios que informan el procedimiento laboral.

Artículo 479.- Una vez firme y ejecutoriada la sentencia y transcurrido el plazo señalado en el artículo 475, el tribunal remitirá al quinto día los autos al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional cuando ello fuere procedente, a fin de que éste continúe con la ejecución de conformidad a las reglas de este Párrafo.

Recibido el expediente por el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional o certificado por el tribunal que dictó la sentencia que ésta se encuentra firme y ejecutoriada, según sea el caso, junto con ordenar el cumplimiento del fallo, se deberán remitir sin más trámite los autos a la unidad de liquidación o al funcionario encargado para que se proceda a la liquidación del crédito, ya sea determinando los montos que reflejen los rubros a que se ha condenado u obligado el ejecutado y, en su caso, se actualicen los mismos, aplicando los reajustes e intereses legales.

La liquidación deberá practicarse dentro de tercero día y será notificada por carta certificada a los apoderados de las partes, junto con el requerimiento al vencido para que pague dentro de los cinco días siguientes. En caso que la ejecución haya quedado a cargo de un tercero, la notificación deberá practicarse en forma personal.

Artículo 480.- Iniciada la ejecución, el tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar a la Tesorería General de la República que retenga de las sumas que por concepto de devolución de impuestos a la renta corresponda restituir al ejecutado, el monto objeto de la ejecución, con sus reajustes, intereses y multas. Esta medida tendrá el carácter de precautoria.

Artículo 481.- En el caso que las partes pactaren una forma de pago del crédito perseguido en los autos, este pacto deberá ser ratificado ante el juez de la causa y la o las cuotas que se acuerden deberán consignar los reajustes e intereses del período. El no pago de una o más cuotas hará inmediatamente exigible el total de la deuda, facultándose al acreedor para que concurra ante el mismo tribunal, y dentro del plazo de sesenta días contado desde el incumplimiento, para que se ordene y cumpla el pago, pudiendo el juez incrementar el saldo de la deuda hasta en un ciento cincuenta por ciento. El pacto así ratificado, tendrá mérito ejecutivo para todos los efectos legales.

Artículo 482.- Notificada la liquidación, las partes tendrán el plazo de cinco días para objetarla, sólo si de ella apareciere que hay errores de cálculo numérico, alteración en las bases de cálculo o elementos o incorrecta aplicación de los índices de reajustabilidad o de intereses emanados de los órganos competentes.

El tribunal resolverá de plano la objeción planteada, pudiendo oír a la contraria si estima que los antecedentes agregados a los autos no son suficientes para emitir pronunciamiento.

Artículo 483.- La parte vencida o ejecutada sólo podrá oponer, dentro del mismo plazo a que se refiere el artículo anterior, alguna de las siguientes excepciones, acompañando antecedentes escritos de debida consistencia: pago de la deuda, remisión, novación y transacción. El tercero podrá, además, excepcionarse con la inoponibilidad de la acción, dentro del mismo plazo señalado.

De la oposición se dará un traslado por tres días a la contraria y con o sin su contestación se resolverá sin más trámites, siendo la sentencia apelable en el solo efecto devolutivo.

Artículo 484.- Si no se ha pagado dentro del plazo señalado para ello en el inciso tercero del artículo 479, el ministro de fe procederá a trabar embargo sobre bienes muebles o inmuebles suficientes para el cumplimiento íntegro de la ejecución y sus costas. Hará, además, una tasación prudencial de los mismos que consignará en el acta de la diligencia, todo ello sin que sea necesario orden previa del tribunal.

Si no ha habido oposición oportuna o existiendo ha sido desechada, se ordenará sin más trámite hacer debido pago al ejecutante con los fondos retenidos, embargados o cautelados. En su caso, los bienes embargados serán rematados por cifras no menores al setenta y cinco por ciento de la tasación en primera subasta; en la segunda el mínimo será del cincuenta por ciento del valor de la tasación, y en la tercera no habrá mínimo. El ejecutante podrá participar en el remate y adjudicarse los bienes con cargo al monto de su crédito.

Los trámites y diligencias del procedimiento de apremio ya indicados, serán fijados por el tribunal consecuentemente con los principios propios de la judicatura laboral y teniendo como referencia las reglas de la ejecución civil, en lo que sean conciliables con dichos principios.

Artículo 485.- Las resoluciones que se dicten en los procedimientos regulados por este Párrafo serán inapelables, salvo lo dispuesto en el artículo 483.

Artículo 486.- Tratándose de títulos ejecutivos laborales distintos a los señalados en el número 1 del artículo 477, su ejecución se regirá por las disposiciones que a continuación se señalan y a falta de norma expresa, le serán aplicables las disposiciones de los Títulos I y II del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, siempre que dicha aplicación no vulnere los principios que informan el procedimiento laboral.

Una vez despachada la ejecución, el juez deberá remitir sin más trámite los autos a la unidad de liquidación o al funcionario encargado, según corresponda, para que se proceda a la liquidación del crédito, lo que deberá hacerse dentro de tercer día.

En los juicios ejecutivos se practicará personalmente el requerimiento de pago al deudor y la notificación de la liquidación, pero si no es habido se procederá en la forma establecida en el artículo 437, expresándose en la copia a que este mismo se refiere, a más del mandamiento, la designación del día, hora y lugar que fije el ministro de fe para practicar el requerimiento. No concurriendo a esta citación el deudor, se trabará el embargo inmediatamente y sin más trámite.

En lo demás, se aplicarán las reglas contenidas en los artículos 480, 481, 482; inciso primero del artículo 483, e incisos segundo y tercero del artículo 484.

Párrafo 5º De los recursos

Artículo 487.- Los recursos se regirán por las normas establecidas en este Párrafo, y supletoriamente por las normas establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 488.- La solicitud de reposición de una resolución pronunciada en una audiencia deberá interponerse y resolverse en el acto.

Artículo 489.- Sólo serán susceptibles de apelación laboral las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las resoluciones que fijan el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

Tratándose de medidas cautelares, la apelación de la resolución que la otorgue o que rechace su alzamiento, se concederá en el solo efecto devolutivo.

Artículo 490.- La apelación laboral deberá interponerse en el plazo de cinco días contado desde la notificación de la respectiva resolución a la parte que lo entabla. El apelante, al deducirlo, deberá fundarlo someramente, exponiendo las peticiones concretas que formula respecto de la resolución apelada.

El apelado podrá hacer observaciones a la apelación hasta antes de la vista de la causa.

Artículo 491.- Los antecedentes se enviarán a la Corte de Apelaciones al tercer día de notificada la resolución que concede el último recurso de apelación.

Las partes se considerarán emplazadas en segunda instancia por el hecho de notificárseles la concesión del recurso de apelación.

No será necesaria la comparecencia de las partes en segunda instancia.

Artículo 492.- En segunda instancia no será admisible prueba. Excepcionalmente el tribunal de alzada podrá admitir prueba documental, siempre que la parte que la presente justifique haber estado imposibilitada de rendirla en primera instancia.

Artículo 493.- La sentencia deberá pronunciarse dentro del plazo de cinco días contado desde el término de la vista de la causa.

El Tribunal de Alzada se hará cargo en su fallo de las argumentaciones formuladas por las partes en los escritos que al efecto le presenten.

Artículo 494.- La sentencia definitiva dictada con infracción de garantías constitucionales, o con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, será recurrible de nulidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente. Sin perjuicio de ello, si respecto de la materia de derecho objeto del recurso existieran distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, conocerá del recurso la Corte Suprema.

En contra de la sentencia definitiva no procederán más recursos.

Artículo 495.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, también procederá el recurso de nulidad cuando:

a) La sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado o cuya recusación se encuentre pendiente o hubiese sido declarada por tribunal competente;

b) Hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre publicidad y continuidad del juicio, o cualquier

otro requisito para los cuales la ley haya previsto la nulidad o lo haya declarado expresamente como esencial;

c) La sentencia contuviere decisiones contradictorias, hubiere otorgado más allá de lo pedido por las partes, o se hubiere extendido a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de las facultades para pronunciarse de oficio que la ley expresamente le otorgue, y

d) La sentencia haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello alegado oportunamente en el juicio.

En esos casos, si la Corte acogiese el recurso, junto con anular la sentencia deberá determinar el estado en que hubiere de quedar el procedimiento, ordenando remitir los antecedentes al tribunal que corresponda. No producirán nulidad aquellos defectos que no influyen en lo dispositivo del fallo, sin perjuicio de las facultades de corregir de oficio que tiene la Corte durante el conocimiento del recurso.

Artículo 496.- El recurso de nulidad deberá interponerse por escrito, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia que se recurre, ante el tribunal que la hubiere dictado. El escrito deberá cumplir, además, con los siguientes requisitos:

a) Expresar el vicio o la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece la sentencia, según corresponda, y

b) En los casos del artículo 495, señalar además el modo en que dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Artículo 497.- La interposición del recurso de nulidad suspende los efectos de la sentencia recurrida, debiendo el tribunal a quo pronunciarse sobre su admisibilidad.

La inadmisibilidad sólo podrá fundarse en haberse deducido el recurso en contra de resolución que no fuere impugnada por este medio o en haberse deducido fuera de plazo. Esta resolución será susceptible de reposición dentro de tercero día.

Admitido el recurso, el tribunal a quo remitirá a la Corte copia de la sentencia definitiva impugnada, del registro de la audiencia del juicio oral o de las actuaciones determinadas que se impugnaren y del escrito en que se hubiere interpuesto el recurso.

Artículo 498.- Ingresado el recurso a la Corte, se abrirá un plazo de cinco días, para que las demás partes soliciten la

declaración de inadmisibilidad, conforme con las mismas causas señaladas en el artículo anterior, le formulen observaciones o se adhirieran al recurso.

El escrito de adhesión deberá cumplir con los mismos requisitos que el del recurso principal y su procedencia será resuelta de plano por la Corte.

Artículo 499.- Vencido el plazo del artículo anterior, la Corte se pronunciará en cuenta sobre su admisibilidad. Sin embargo, si el recurso fue deducido para ante la Corte Suprema, ésta no se pronunciará sobre su admisibilidad, sino que procederá a su remisión a la Corte de Apelaciones correspondiente cuando considere que no existen distintas interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del mismo, o que existiendo en los casos de infracción de ley, no fueren determinantes para la decisión de la causa.

Artículo 500.- Sólo podrá producirse prueba sobre las circunstancias que constituyeren la causa invocada, y siempre que ésta haya sido ofrecida en el escrito de interposición del recurso. La prueba se recibirá en la audiencia de acuerdo a las normas que rigen su recepción en el procedimiento ordinario laboral.

Artículo 501.- La Corte deberá fallar el recurso dentro de los veinte días siguientes al momento en que hubiere terminado de conocer de él, exponiendo los fundamentos que sirvieron de base a su decisión. Si rechaza el recurso deberá pronunciarse sobre las cuestiones controvertidas. Si lo acoge, podrá limitarse a determinar la causal o causales que le hubieren sido suficientes, dictando la sentencia de reemplazo o señalando el estado en que queda el juicio, según corresponda.

La sentencia de reemplazo que se conformare a la ley será pronunciada sin nueva audiencia, pero separadamente.

En contra de la resolución que falle un recurso de nulidad no procederá recurso alguno.

Párrafo 6º Del Procedimiento de Tutela Laboral

Artículo 502.- El procedimiento contenido en este párrafo se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de la normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º inciso primero, 4º inciso primero, 5º en lo relativo a la inviolabilidad de toda

forma de comunicación privada, 6º inciso primero, 12º inciso primero y 16º en lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador.

También se aplicará este procedimiento para conocer de los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2º de este Código.

Se entenderá que los derechos y garantías a que se refiere el inciso anterior resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial.

Interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, no se podrá impetrar una denuncia de conformidad a las normas de este Párrafo, que se refiera a los mismos hechos.

Artículo 503.- Cualquier trabajador u organización sindical que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones jurídicas cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción laboral, podrá impetrar su tutela por la vía de este procedimiento.

Cuando el trabajador afectado por una lesión de derechos fundamentales haya incoado una acción conforme a las normas de este Párrafo, la organización sindical a la cual se encuentre afiliado, personalmente o a través de su organización, podrá hacerse parte en el juicio como tercero coadyuvante.

Sin perjuicio de lo anterior, la organización sindical a la cual se encuentre afiliado el trabajador cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados, podrá interponer denuncia, y actuará en tal caso como parte principal.

La Inspección del Trabajo, a requerimiento del tribunal, deberá emitir un informe acerca de los hechos denunciados. Podrá, asimismo, hacerse parte en el proceso.

Si actuando dentro del ámbito de sus atribuciones y sin perjuicio de sus facultades fiscalizadoras, la Inspección del Trabajo toma conocimiento de una vulneración de derechos fundamentales, deberá denunciar los hechos al tribunal competente y acompañar a dicha denuncia el informe de fiscalización correspondiente. Los hechos constatados de que dé cuenta el informe, constituirán presunción legal de veracidad, con arreglo

al inciso final del artículo 23 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Esta denuncia servirá de suficiente requerimiento para dar inicio a la tramitación de un proceso conforme a las normas de este Párrafo. La Inspección del Trabajo podrá hacerse parte en el juicio que por esta causa se entable.

La denuncia a que se refieren los incisos anteriores deberá interponerse dentro de sesenta días contados desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada. Este plazo se suspenderá en la forma a que se refiere el artículo 168.

Artículo 504.- Este procedimiento queda limitado a la tutela de derechos fundamentales a que se refiere el artículo 502.

No cabe, en consecuencia, su acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos.

Artículo 505.- La tramitación de estos procesos gozará de preferencia respecto de todas las demás causas que se tramiten ante el mismo tribunal.

Con igual preferencia se resolverán los recursos que se interpongan.

Artículo 506.- Si la vulneración de derechos fundamentales se hubiere producido con ocasión del despido, éste no producirá efecto alguno. La legitimación activa para recabar su tutela por la vía del procedimiento regulado en este Párrafo corresponderá exclusivamente al trabajador afectado.

En este caso, la denuncia deberá interponerse dentro del plazo de sesenta días contado desde la separación, el que se suspenderá en la forma a que se refiere el inciso final del artículo 168.

El trabajador podrá optar entre la reincorporación decretada por el tribunal, en cuyo caso el empleador deberá pagar al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones derivadas de la relación laboral durante el período comprendido entre la fecha del despido y aquella en que se materialice la reincorporación, o la indemnización establecida en el artículo 163, con el correspondiente recargo y, adicionalmente, a una indemnización que fijará el juez de la causa, la que no podrá ser inferior a tres meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual.

En caso de optar por la indemnización a que se refiere el inciso anterior, ésta será fijada incidentalmente por el tribunal que conozca de la causa.

El juez de la causa, en estos procesos, deberá requerir el informe de fiscalización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 503.

Con todo, y sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente respecto del plazo para solicitar la calificación del despido como injustificado, indebido o improcedente a que se refiere el artículo 168, se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 446 y sólo comenzará a correr luego de quedar ejecutoriada la sentencia que desestime la denuncia por vulneración de derechos fundamentales.

Artículo 507.- La denuncia deberá contener, además de los requisitos generales que establece el artículo 444, la enunciación clara y precisa de los hechos constitutivos de la vulneración alegada.

El tribunal no admitirá a tramitación las denuncias que no cumplan con los requisitos establecidos en este Párrafo.

Artículo 508.- Admitida la denuncia a tramitación, el juez citará al denunciante, al denunciado y a los presuntamente afectados, a una audiencia única a fin de que expongan lo que estimen conveniente acerca de los hechos sobre los cuales versa la denuncia, ordenándoles que acompañen todos los antecedentes que crean necesarios para resolver, fijando para tal efecto, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la resolución, el día y la hora para su celebración, debiendo mediar entre la notificación de la denuncia y citación y la celebración de la audiencia, a lo menos, cinco días.

Artículo 509.- El juez, de oficio o a petición de parte, dispondrá, en la primera resolución que dicte, la suspensión de los efectos del acto impugnado, cuando aparezca de los antecedentes acompañados al proceso que se trata de lesiones de especial gravedad o cuando la vulneración denunciada pueda causar, efectos irreversibles, ello, bajo apercibimiento de multa de cien a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales, la que podrá repetirse hasta obtener el debido cumplimiento de la medida decretada. Deberá también hacerlo en cualquier tiempo, desde que cuente con dichos antecedentes.

Contra estas resoluciones no procederá recurso alguno.

Artículo 510.- Cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

Artículo 511.- Con el mérito del informe de fiscalización, de lo expuesto por los citados y de las demás pruebas acompañadas al proceso, el juez dictará sentencia en la misma audiencia o dentro de quinto día. Se aplicará en estos casos, lo dispuesto en el artículo 470.

Artículo 512.- La sentencia deberá contener, en su parte resolutive:

1. La declaración de existencia o no de la lesión de derechos fundamentales denunciada.

2. En caso afirmativo, deberá ordenar, de persistir el comportamiento antijurídico a la fecha de dictación del fallo, su cese inmediato, bajo el apercibimiento señalado en el inciso primero del artículo 509;

3. La indicación concreta de las medidas a que se encuentra obligado el infractor dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales, bajo el apercibimiento señalado en el inciso primero del artículo 509, incluidas las indemnizaciones que procedan, y

4. La aplicación de las multas a que hubiere lugar, de conformidad a las normas de este Código.

En cualquier caso, el juez deberá velar para que la situación se retrotraiga al estado inmediatamente anterior de producirse la vulneración denunciada y se abstendrá de autorizar cualquier tipo de transacción que mantenga indemne la conducta lesiva de derechos fundamentales.

Copia de esta sentencia deberá remitirse a la Dirección del Trabajo para su registro.

Párrafo 7°

Del procedimiento monitorio

Artículo 513.- Respecto de las contiendas por término de la relación laboral cuya cuantía sea igual o inferior a cuatro ingresos mínimos mensuales, se aplicará el procedimiento que a continuación se señala.

Artículo 514.- El procedimiento monitorio se iniciará mediante la presentación del reclamo ante la Inspección del Trabajo. Las

partes deberán concurrir a un comparendo de conciliación acompañando todos los instrumentos probatorios en que se funde su pretensión. El Inspector del Trabajo, al cursar la citación podrá instruir que se acompañen los contratos de trabajo, balances, comprobantes de remuneraciones, registros de asistencia y cualquier otra documentación pertinente.

En dicho acto las partes que asistan deberán fijar domicilio dentro de los límites urbanos de la ciudad en que funciona el tribunal respectivo.

Se levantará acta de todo lo obrado en el comparendo.

Artículo 515.- En el caso de no existir conciliación, o si no se presentare alguna de las partes habiendo sido legalmente citada, el Inspector del Trabajo deberá remitir todos los instrumentos y el acta del comparendo al juzgado competente.

De lo obrado en el comparendo se entregará copia a las partes que asistan y se remitirá el acta por carta certificada a las partes que no comparezcan.

Artículo 516.- En caso que el juez estime fundadas las pretensiones del requirente, las acogerá inmediatamente; en caso contrario, las rechazará de plano.

En el caso de las partes que hayan asistido al comparendo a que se refiere el artículo 514, esta resolución les será notificada por carta certificada, al domicilio que hubieren señalado en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo, las que por este acto se entenderán emplazadas.

Artículo 517.- Las partes tendrán cinco días para reclamar de esta resolución ante el Tribunal que la dictó.

Presentado el reclamo, el juez citará a las partes a una audiencia que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes.

Artículo 518.- La audiencia se desarrollará de conformidad a lo dispuesto en los artículos 449 y siguientes.

Artículo 519.- La sentencia que se dicte en este procedimiento será susceptible de recurso de nulidad, previa consignación en la cuenta del tribunal del total del monto al cual la parte recurrente fue condenada en la sentencia.

En caso de rechazarse el recurso, el monto consignado se destinará al pago de lo ordenado en la sentencia, girándose el monto a favor del demandante.

Párrafo 8º

Del procedimiento de reclamación de multas y demás resoluciones administrativas

Artículo 520.- Las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos, se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo o por los funcionarios que se determinen en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe.

En todos los trámites a que dé lugar la aplicación de sanciones, regirá la norma del artículo 4º.

Recibida la reclamación, y previa verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso anterior, el juez citará al reclamante y al reclamado a una audiencia única, a fin de que expongan lo que estimen conveniente acerca de los hechos sobre los cuales versa la reclamación y les ordenará que acompañen todos los antecedentes que crean necesarios para resolver, fijando para tal efecto, dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha de la resolución, el día y la hora para su celebración, debiendo mediar entre la notificación de la reclamación y citación y la celebración de la audiencia, a lo menos, diez días.

Con el mérito de lo expuesto y de las pruebas rendidas, el juez dictará sentencia en la misma audiencia o dentro de tercero día.

La sentencia que resuelva la reclamación no será apelable.

Serán responsables del pago de la multa la persona natural o jurídica propietaria de la empresa, predio o establecimiento. Subsidiariamente responderán de ellas los directores, gerentes o jefes de la empresa, predio o establecimiento donde se haya cometido la infracción.

Artículo 521.- En todos aquellos casos en que en virtud de este Código u otro cuerpo legal, se establezca reclamación judicial en contra de resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, se aplicará el procedimiento descrito en el artículo anterior en todo aquello que no fuese incompatible.”.

17. Agrégase el siguiente inciso final, nuevo, al artículo 476 que conforme al numeral 18 de este artículo pasa a ser 522:

“Constituyen actos de discriminación las amenazas o represalias ejercidas por el empleador en contra de trabajadores en razón o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales, cualquiera sea la naturaleza de éstas.”.

18. Reemplázase la numeración de los artículos 476, 477, 478, 478 bis, 479, 480, 481, 482 y 483, por la siguiente: 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529 y 530, respectivamente.

ARTÍCULO 2º.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley en el primer año de su vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1º transitorio.- La presente ley entrará en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 2º transitorio.- Las causas que se hubieren iniciado antes de la vigencia de esta ley seguirán substanciándose, hasta la dictación de la sentencia definitiva, conforme al procedimiento en vigor al momento de la notificación de la demanda.

Artículo 3º transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, mediante un decreto con fuerza de ley del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dicte un texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 15 y 23 de junio, y 4, 11 y 13 de julio, de 2005, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos Bombal Otaegui (Presidente), Julio Canessa Robert, Augusto Parra Muñoz, Mario Ríos Santander y José Ruiz De Giorgio.

Sala de la Comisión, a 18 de julio de 2005.

MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE SUSTITUYE EL PROCEDIMIENTO LABORAL CONTEMPLADO EN EL LIBRO V DEL CÓDIGO DEL TRABAJO (BOLETÍN N° 3.367-13)

- I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:** modernizar la justicia laboral y previsional, dotándola de un procedimiento sustentado en los principios de contradicción, celeridad, oralidad, intermediación, concentración, impulso procesal de oficio, publicidad, buena fe y gratuidad. Lo anterior, para contar con una justicia eficaz y oportuna.
- II. ACUERDOS:** aprobado en general (5x0).
- III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:** consta de dos artículos permanentes -el primero, dividido en 18 numerales- y tres disposiciones transitorias.
- IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL:** os hacemos presente que deben aprobarse como normas de rango orgánico constitucional los números 15, y 16, respecto a los artículos 426, inciso segundo, y 494, inciso primero, todos del artículo 1º permanente del proyecto, por cuanto inciden en atribuciones de los tribunales de justicia, en atención a lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política. Lo anterior, en relación con el artículo 63, inciso segundo, del Texto Fundamental.

Cabe señalar que, en su oportunidad, la Honorable Cámara de Diputados recabó el parecer de la Excelentísima Corte Suprema, la que emitió su opinión por Oficio N° 2.346, de 4 de noviembre de 2003.
- V. URGENCIA:** "simple".
- VI. ORIGEN INICIATIVA:** Cámara de Diputados. Mensaje de S.E. el Presidente de la República.
- VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL:** segundo.
- VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS:** unánime (103x0).

- IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO:** 7 de junio de 2005.
- X. TRÁMITE REGLAMENTARIO:** primer informe.
- XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:** 1) la Constitución Política; 2) el Código del Trabajo; 3) el Código de Procedimiento Civil; 4) el Código Orgánico de Tribunales; 5) el Código Penal; 6) la ley N° 17.322, que establece normas para la cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas de las instituciones de previsión; 7) la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; 8) el decreto ley N° 3.500, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones, y 9) el decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1967, que fijó las funciones de la Dirección del Trabajo.

Valparaíso, 18 de julio de 2005.

MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario de la Comisión

- - -